

Cómo atacar el patrimonio del demandado en una ejecución civil: Consejos prácticos para intentar lograr el cobro de las deudas

Jaime Font de Mora Rullán.

Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado nº3 de Torrent

Artículo Monográfico. Mayo 2021

SP/DOCT/111814

Resumen

En este artículo se expone un resumen detallado de las principales medidas que se pueden adoptar en el seno de las ejecuciones dinerarias a fin de intentar lograr el cobro de las deudas reclamadas. Para ello se examina el requerimiento de designación de bienes del artículo 589 LEC, la averiguación patrimonial del artículo 590 LEC y, sobre todo, se desgranán las principales medidas ejecutivas y sus garantías que pueden adoptarse durante el curso de la ejecución, profundizando en los aspectos más controvertidos o que suscitan dudas en la práctica. Por otro lado, se aborda la cuestión de los pagos judiciales indagando si los mismos han de realizarse siempre a favor de las partes o si, por el contrario, en determinados casos se pueden realizar los abonos a nombre de los profesionales que las representan. En definitiva, se pretende ofrecer una visión sistemática de las principales opciones de que dispone el ejecutante a fin de que la ejecución dineraria resulte fructífera y se pueda archivar al haber logrado la completa satisfacción del acreedor ejecutante tal y como reza el artículo 570 de la LEC.

Abstract

This article provides a detailed summary of the main measures that can be adopted in the context of monetary executions in order to try to achieve the collection of the debts claimed. To this end, it examines the request for the designation of assets under article 589 LEC, the patrimonial inquiry under article 590 LEC and, above all, the main executive measures and their guarantees that can be adopted during the course of the execution are described, delving into the most controversial aspects or those that raise doubts in practice. On the other hand, the issue of judicial payments is addressed, inquiring whether they must always be made in favor of the parties or whether, on the contrary, in certain cases, payments may be made in the name of the professionals representing them. In short, the aim is to offer a systematic view of the main options available to the executor in order to ensure that the monetary execution is successful and can be filed once the executing creditor has been fully satisfied, as stipulated in article 570 of the LEC.

Palabras Clave

Embargo, garantía, averiguación, manifestación, letrado de la administración de justicia, Juzgados y Tribunales, precinto, inscripción registral.

Keywords

Seizure, guarantee, inquiry, manifestation, legal counsel, Courts and Tribunals, sealing, registration.

I Introducción: la importancia del tiempo en la ejecución civil. Entre el impulso de oficio y de parte.

En las ejecuciones civiles dinerarias el transcurso del tiempo resulta casi siempre un factor crucial, pues el éxito de la demanda ejecutiva interpuesta dependerá en buena medida de que se actúe con la necesaria rapidez y celeridad a fin de evitar las circunstancias que puedan llegar a frustrar las medidas ejecutivas adoptadas. Como sucederá, por ejemplo, si se anticipan otras ejecuciones frente al mismo ejecutado, pues en muchas ocasiones cuando el demandado entra en situación de insolvencia es habitual que proliferen las reclamaciones y ejecuciones frente al mismo, compitiendo por una serie de recursos limitados, llegando incluso a declararse el concurso de acreedores sobrevenido del deudor, lo que conllevará la suspensión de la ejecución (568 LEC). En el caso de los bienes inmuebles y demás sujetos a inscripción, como los vehículos, ese factor temporal puede resultar decisivo para llegar a cobrar, pues en dicho ámbito rige plenamente el clásico principio de prioridad temporal o *prior in tempore, potior in iure*.

Pero también puede ocurrir que el retraso en la ejecución dé lugar a que la parte demandada despliegue una serie de actuaciones para intentar sustraer total o parcialmente su patrimonio a la acción del Tribunal, descapitalizándose. Y sin perjuicio de que ese tipo de conductas puedan llegar a ser constitutiva de delito, concretamente un alzamiento de bienes, muchas veces en la vía civil resulta muy complicado actuar frente a ese tipo de obstáculos, como, por ejemplo, cuando se pasa a cobrar en "negro" parte del salario o se sacan los ahorros de la cuenta bancaria para que no puedan ser embargados, realizando ingresos puntuales que son inmediatamente retirados. Porque lo cierto es que los órganos judiciales tienen pocos recursos a su alcance para luchar contra la economía sumergida o en "b" de los ejecutados, como más adelante se expondrá.

Por eso la celeridad en el despacho de la ejecución puede ser el factor decisivo para lograr el cobro de la cantidad reclamada. Ahora bien, es indudable que ese factor del tiempo y la rapidez en la sustanciación del procedimiento ejecutivo no siempre dependerán de la diligencia de la propia parte ejecutante, pues ello suele verse afectado por circunstancias externas como serían la carga de trabajo que soporte el órgano judicial y el retraso acumulado en el despacho de las ejecuciones. Circunstancias que suelen constituir un factor estructural del Sistema Público de Justicia de muy compleja solución, siendo en ocasiones llamativa la diferencia en los tiempos de respuesta entre órganos judiciales de un mismo partido judicial por las vicisitudes que han padecido en su funcionamiento (bajas de personal, vacantes sin cubrir, etc), y mucho más entre distintos partidos judiciales, existiendo en ocasiones una diferencia extrema entre los Juzgados de "capital" y los de "pueblo" (calificada en muchas ocasiones como Justicia de "trinchera") por la diferencia en los recursos invertidos por los poderes públicos.

Pero precisamente por ello pasa a ser esencial que la parte actora realice correctamente sus deberes desde el inicio, presentando una demanda ejecutiva lo más completa posible en la que se detallen todas las medidas y actuaciones que se solicitan del órgano judicial para evitar tener que presentar sucesivos escritos que tarden a su vez un tiempo considerable en ser proveídos. En este sentido, es aconsejable que, en la medida de lo posible, la parte ejecutante se anticipe a la respuesta del órgano judicial y prevea cuál puede ser su conducta ante las distintas peticiones que vayan a formular, así como que sea capaz de anticipar las incidencias que se pueden suscitar durante el curso de la ejecución.

Y es que hay que tener presente que en la ejecución civil rige como regla general el principio de impulso de parte, pues si bien el artículo 179.1 de la LEC consagra el principio de impulso de oficio en el ámbito procesal al señalar que **"salvo que la ley disponga otra cosa, el Letrado de la Administración de Justicia dará de oficio al proceso el curso que corresponda, dictando al efecto las resoluciones necesarias"** lo cierto es que tal impulso de oficio no se extiende a la adopción de las concretas medidas ejecutivas que resulten procedentes para lograr el cobro de la cantidad reclamadas, medidas que en su caso deberán ser propuestas por la propia parte interesada, pues el artículo 551.3ª de la LEC indica que el decreto que debe dictarse tras recaer el auto con la orden general de ejecución contendrá **"1.º Las medidas ejecutivas concretas que resultaren procedentes, incluido si fuera posible el embargo de bienes."**, pero no se contiene un mandato que habilite a proceder de oficio en ese sentido, rigiendo los principios clásicos de impulso de parte y dispositivo que informan nuestro ordenamiento jurídico privado en virtud de la autonomía de la voluntad e interés de parte (cifrense a tal efecto los artículos 1205 CC y 19 LEC entre otros). En este sentido, el orden jurisdiccional civil presenta una diferencia relevante respecto al orden jurisdiccional social, en el cual sí se consagra el principio de impulso de oficio de la ejecución al disponer el artículo 239.3 de la Ley 26/11 reguladora de la jurisdicción social que **"iniciada la ejecución, la misma se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones necesarias."**

Esta configuración legal de la ejecución civil es la que ha dado lugar a que, tradicionalmente y con contadas excepciones, deba ser la parte ejecutante la que impulse el procedimiento ejecutivo intentando localizar los bienes del ejecutado susceptible de embargo y realización como medio para cobrar la deuda reclamada. Por eso mismo resulta imprescindible que la parte actora enfoque de manera acertada la ejecución desde su inicio y la vaya impulsando de forma diligente a través de los distintos trámites que la integran.

En cualquier caso, resulta evidente el principal límite con que se encuentra la ejecución civil está constituido por la propia existencia de bienes y activos en el patrimonio de la parte ejecutada, pues en otro caso la ejecución está condenada al fracaso a pesar de toda la actividad ejecutiva que pueda desplegar el órgano judicial a instancia de la parte ejecutante. Esta situación de inexistencia de patrimonio tampoco recibe un tratamiento adecuado en el proceso civil ya que no recoge expresamente el archivo provisional por insolvencia del demandado, a diferencia de lo que acontece en el procedimiento laboral, donde sí está expresamente prevista (artículos 243.3 y 276 LJS), de forma que la ejecución civil únicamente puede concluir si se alcanza la completa satisfacción de la parte ejecutante, tal y como previene el artículo 570 LEC. Este es el motivo por el que en la práctica de nuestros Juzgados y Tribunales se procede una forma un tanto paradójica y no reglada expresamente ni tan siquiera por el CGPJ, acordando el archivo provisional de las ejecuciones por inactividad de las partes, generalmente transcurrido el plazo de un año, lo que se acuerda a los meros efectos estadísticos, bien mediante una simple diligencia de constancia que ni tan siquiera se notifica a las partes, bien mediante una diligencia de ordenación o decreto notificado a las partes personadas. Pero lo cierto es que ese archivo provisional por inactividad no se refleja en la estadística judicial, sino que se incluye de forma global en las ejecuciones concluidas, consignándose posteriormente las ejecuciones que son reaperturadas si el procedimiento vuelve a activarse a petición de la parte ejecutante, de manera que lo cierto es que se desconoce del dato de cuál es el volumen real de ejecuciones que concluyen sin éxito al ser remitidas al archivo de forma previsional por inactividad. Cabe preguntarse si es una cuestión que no interesa conocer a los poderes públicos porque dicho dato podría resultar desolador.

En mi opinión, para paliar dicha situación, sería conveniente una modificación profunda de la normativa actual a fin de introducir también en la ejecución civil el principio de impulso de oficio, contemplando paralelamente la posibilidad de acordar el archivo provisional por insolvencia del ejecutado, situación que se computaría de forma independiente en la estadística judicial. Y ello tendría que ir acompañado también de una reforma decidida de la productividad de las Oficina Judicial, cobrando en ese plus salarial en función del volumen económico recobrado en las correspondientes ejecuciones (como sucede en otras Administraciones Públicas, por ejemplo, la Seguridad Social), de forma que los integrantes del órgano judicial tuviesen un incentivo económico directo para impulsar la tramitación de los procedimientos ejecutivos.

Pero en tanto ello no ocurra así, hay que partir de la normativa actual, por lo que deberá ser la parte ejecutante quien impulse la ejecución a través de las medidas que se van a exponer a continuación.

II Primer paso: la averiguación patrimonial. Artículo 590 LEC.

El primer paso para poder impulsar la ejecución dineraria consiste en averiguar si la parte ejecutada dispone en su patrimonio de bienes, activos o derechos con cuya realización se pueda cubrir la deuda reclamada. Dicha averiguación puede desplegarse tanto de forma extrajudicial como judicial.

La averiguación extrajudicial, realizada directamente por la propia parte actora, resulta en la práctica un recurso excepcional y puntal, limitado por lo general a las ejecuciones en que se reclaman sumas de dinero elevadas, en cuyo caso el ejecutante sí puede valorar acudir a empresas especializadas para obtener dicha información o intentar desplegar esa labor por sí misma. También en los supuestos en que la parte ejecutante tiene un conocimiento extrajudicial directo de la situación del ejecutado, como sucede por ejemplo en las ejecuciones de familia o similares.

En última instancia esa escasa utilización obedece a varios motivos. En primer lugar, por los problemas de acceso a las fuentes de información, que pueden estar limitadas por toda la normativa en materia de protección de datos de carácter personal, que ha pasado a ser una cuestión de primer orden en los tiempos actuales (cifrese el caso del Catastro en cuanto a la información de la titularidad de los inmuebles a través del NIF). Y, en segundo lugar, porque dicha información puede tener un coste adicional que la parte ejecutante desee evitarse apelando directamente a los recursos de investigación de que dispone el propio órgano judicial, máxime cuando resultaría controvertido que la actora pueda recuperar ese coste adicional por vía de la tasación de costas al tratarse de una actuación preprocesal¹.

En cualquier caso, pese a su uso excepcional, no cabe duda de que la parte ejecutante puede desplegar cualquier actividad extrajudicial e iniciativa que esté a su alcance a fin de buscar indicios de riqueza y titularidad de bienes y derechos en poder del ejecutado, pudiendo incluso ser de gran utilidad a estos efectos la indagación a través de las redes sociales del deudor (Facebook y otras), que han cobrado una importancia inusitada en la sociedad tecnologizada en que vivimos.

Si como consecuencia de dichas actuaciones la parte ejecutante obtiene conocimiento de la existencia de bienes del deudor, puede designarlos directamente en la demanda ejecutiva, solicitando al órgano judicial que proceda a su traba, lo que acordará el Letrado de la Administración de Justicia tras el despacho de la ejecución dictando el oportuno decreto tal y como señala el artículo 551.3 LEC antes citado. Una práctica cada vez más extendida consiste en designar a tal fin las cuentas bancarias y devoluciones tributarias del deudor, formando parte dicho pedimento del modelo tipo de demanda ejecutiva.

Pero lo más frecuente en la práctica es que la parte actora desconozca si el ejecutado dispone de bienes, por lo que tendrá que solicitar al órgano judicial que realice la correspondiente averiguación patrimonial. Esta medida está expresamente regulada en el artículo 590 LEC, precepto que no obstante su relevancia, no se ha adaptado hasta la fecha a las importantes novedades tecnológicas implementadas en este ámbito. Concretamente dispone dicho precepto que *"a instancias del ejecutante que no pudiese designar bienes del ejecutado suficientes para el fin de la ejecución, el Letrado de la Administración de Justicia acordará, por diligencia de ordenación, dirigirse a las entidades financieras, organismos y registros públicos y personas físicas y jurídicas que el ejecutante indique, para que faciliten la relación de bienes o derechos del ejecutado de los que tengan constancia. Al formular estas indicaciones, el ejecutante deberá expresar sucintamente las razones por las que estime que la entidad, organismo, registro o persona de que se trate dispone de información sobre el patrimonio del ejecutado. Cuando lo solicite el ejecutante y a su costa, su procurador podrá intervenir en el diligenciamiento de los oficios que hubieran sido librados a tal efecto y recibir la cumplimentación de los mismos, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 1 del artículo siguiente."*

Pese a la dicción de dicho precepto, lo cierto es que en la actualidad la averiguación de bienes se realiza normalmente a través de la plataforma tecnológica implementada por el CGPJ denominada Punto Neutro Judicial (PNJ), que permite a los órganos judiciales consultar directamente la información contenida en una serie de bases de datos de organismos públicos, poniendo dicha información a disposición de la parte ejecutante para que, a la vista de su contenido, designe los concretos bienes y activos a trabar.

Concretamente, como define el propio CGPJ, el Punto Neutro Judicial es una red segura de comunicaciones, puesta a disposición de los Órganos Judiciales de toda España para interactuar con las bases de datos de Administraciones y Organismos Públicos y Privados que gestionan información necesaria en la tramitación procesal y para intercambiar información entre ellos, con los operadores jurídicos y con los ciudadanos.

Concretamente, a efectos de la averiguación patrimonial las bases de datos de que se dispone en la actualidad a través del PNJ son las siguientes²:

AEAT: que proporciona información sobre múltiples aspectos de que dispone ese organismo público, concretamente: autoliquidaciones; fondos de Inversión, percepciones del trabajo, ingresos y pagos, cuentas bancarias, transmisión de Valores, planes de Pensión, I.R.P.F., Impuesto de Actividades Económicas, pensiones públicas exentas, domicilio Fiscal.

Oficina Virtual del Catastro: que facilita la certificación de titularidad, así como la descriptiva y gráfica.

Dirección General de Tráfico (DGT): que facilita información sobre antecedentes de los vehículos a través de su matrícula; vehículos que figuran asignados a un DNI – NIE; antecedentes de conductores por DNI – NIE; sanciones administrativas y penales

Instituto Nacional de Estadística (INE): básico para la averiguación domiciliaria.

Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE): permite la consulta de las prestaciones vigentes por desempleo incluyendo todos los datos necesarios como importe IRPF, Seguridad Social, retención Judicial, etc.

Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España (CORPME): facilita dos tipos de información; *índices*, esto es, consulta de los índices de los Registros de la Propiedad, disponible en todos los órganos judiciales, en base al NIF, IDUFIR, datos registrales. Y *notas simples*. Consulta de las Notas Simples de los Registros de la Propiedad; disponible para los órganos judiciales de las jurisdicciones Penal y Social, en base a los mismos criterios de búsqueda.

Dirección General de Policía: facilita la información que consta en DNI.

Seguridad Social: ofrece información de las bases de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Nacional de la Seguridad Social y del Instituto Social de la Marina. Interesa destacar toda la información que se puede obtener a través de la TGSS: consulta de afiliado; consulta de empresa; vida laboral de empresa; informe deuda vigente y cobros, Registro de Prestaciones Sociales Públicas; consultas prestación familiar (incluido el fichero Histórico); consulta resumida expedientes de Incapacidad transitoria, de Maternidad/Paternidad, de Pago Delegado, de Riesgo y de cuidado de menor.

Registros Civiles: esencial para consultar el posible fallecimiento de la parte demandada.

No obstante, pese a la aparente sencillez de este proceso de búsqueda de bienes, son varias las cuestiones prácticas que se plantean en relación con la averiguación patrimonial:

En primer lugar, surgen dudas en lo que respecta a los límites del deber de colaboración órgano judicial con la labor de averiguación que debe desplegar la propia parte ejecutante, pues el artículo 590 in fine de la LEC se encarga de matizar que *"el Letrado de la Administración de Justicia no reclamará datos de organismos y registros cuando el ejecutante pudiera obtenerlos por sí mismo, o a través de su procurador, debidamente facultado al efecto por su poderdante."* Esta previsión legal es el fundamento en que se apoyan o amparan en muchas ocasiones los órganos judiciales para denegar peticiones de los ejecutantes solicitando que se libre oficio a determinados organismos y registros para obtener información al considerar que tales datos se pueden obtener directamente por la propia parte interesada. El ejemplo paradigmático sería la información contenida en el Registro Civil, que es pública para quien acredite interés legítimo en obtener dicha información. Lógicamente ese tipo de decisiones suele dar lugar a los correspondientes recursos de la parte actora, pero los Juzgados y Tribunales son bastante inflexibles respecto a dicho particular.

Pero sobre todo la polémica se suscita en relación con los supuestos en que la información consta en el PNJ, pero también podría obtenerse por la parte acudiendo directamente al organismo o registro correspondiente, como sucede por ejemplo con los inmuebles en el Registro de la Propiedad con los vehículos en la DGT. En tales supuestos, en mi opinión, el órgano judicial debe facilitar a la parte interesada toda la información que consta en el PNJ, sin restricción, pues se trata de información que tiene a su alcance efectuando la consulta en dicha plataforma tecnológica del CGPJ. No debe caerse en una interpretación simplista del artículo 590 LEC que obligue a la ejecutante a realizar una labor adicional que puede retrasar considerablemente la tramitación de la ejecución cuando lo cierto es que el órgano judicial puede obtener tal información tan solo con pulsa un botón. Hay que superar posiciones y mentalidades ancladas en el pasado en relación con esta cuestión. Y además hay que tener presente que la emisión de los correspondientes certificados por los citados organismos puede comportar un coste económico adicional que no es lógico que la parte ejecutante tenga que sufragar cuando la información se puede obtener directamente y de forma automática del sistema, pues dicho coste tendría que ser finalmente repercutido en costas a la parte ejecutada al tratarse de una actuación necesaria, pertinente y útil para el fin de la ejecución y, como tal, reclamable por la vía de la tasación de costas, en concepto de suplido³. Pero lo cierto es que se trata de una cuestión deficientemente regulada que da lugar a prácticas diversas en el foro, pudiendo encontrarse respuestas diversas en función del criterio que sostenga cada órgano judicial.

Precisamente por ello es de gran relevancia que la parte actora, al recibir el resultado de una consulta del PNJ, compruebe qué apartados de entre los disponibles han sido efectivamente consultados, y en caso de que no se haya incluido algún apartado concreto, reclame expresamente del órgano judicial su inclusión. Y ello dado que, aunque el Juzgado o Tribunal disponga de toda la información del PNJ a su alcance, a través de la que se denomina "consulta múltiple", no siempre se seleccionan todos los apartados que lo integran, lo que puede dar lugar a que determinadas fuentes de información queden excluidas, aspecto que del que tiene que estar pendiente la parte interesada para reaccionar oportunamente.

Y al hilo de lo anterior, hay que señalar que se ha planteado en alguna ocasión el debate acerca de si la información obtenida del PNJ debe ser entregada o no directamente a la parte ejecutante a través de Lexnet o el aplicativo correspondiente en la medida en que ello pudiera afectar a la normativa en materia de protección de datos de carácter personal. A este respecto, se pueden encontrar prácticas diversas por los órganos judiciales, como obligar a la parte a que consulte los datos en la propia Oficina Judicial sin facilitarle copia, para que indique los bienes a trabar. Pero la práctica más generalizada y claramente mayoritaria es la que pasa por entregar dicha información directamente a la parte ejecutante para que pueda analizarla de cara a instar las medidas de embargo que considere oportunas. En mi opinión el interés legítimo de la parte en poder obtener dicha información resulta innegable y en apoyo de esta tesis puede citarse el artículo 140 in fine LEC cuando dispone que "las actuaciones de carácter reservado sólo podrán ser conocidas por las partes y por sus representantes y defensores, sin perjuicio de lo previsto respecto de hechos y datos con relevancia penal, tributaria o de otra índole". Por lo tanto, si las partes tienen acceso a las actuaciones reservadas, nada debe impedir que también tengan acceso a los datos del PNJ, pues esa información no requiere de una declaración de reserva expresa. Ello sin perjuicio de que tal información patrimonial se facilite haciendo constar de forma destacada en la resolución dictada la normativa sobre protección de datos de carácter personal aplicable así como la obligación de reserva y de realizar un uso adecuado y justificado de la información facilitada por parte del receptor⁴.

A nivel interno de los órganos judiciales por parte del CGPJ se realizan auditorías para comprobar que por parte de los órganos judiciales se realiza un uso adecuado de la información disponible, estando sancionada cualquier desviación o uso indebido que se detecte. Concretamente, además de determinados avisos directos (cuando se consulta el propio DNI o de un familiar o allegado) hay controles periódicos aleatorios que consisten en exigir al Letrado de la Administración de Justicia que la consulta efectuada está amparada en una resolución judicial. Además, está plenamente garantizada la trazabilidad de las consultas para conocer qué persona en concreto ha realizado las consultas⁵.

Una cuestión también interesante en relación con la averiguación patrimonial, y que no está prevista legamente, es la relativa a la periodicidad con que se puede solicitar que se practique la averiguación, dado que en ocasiones se producen peticiones reiterativas por la parte ejecutante que resultan claramente abusivas y pueden ser por tanto repelidas por parte del órgano judicial. En mi opinión esta cuestión debe ser abordada desde un punto de vista práctico, conforme al sentido común, atendiendo al tipo de información que se solicita. Y así hay que tener en cuenta que el grueso de la información que facilita el PNJ está constituido por los datos tributarios que genera la AEAT y que dicha información únicamente se actualiza una vez cada año cuando se registra la última declaración tributaria presentada por la parte demandada. De forma que carece de toda utilidad estar solicitando dicha información constantemente pues los datos no van a variar hasta el siguiente período impositivo. Cuestión distinta es la información que facilitada por la Seguridad Social o SPEE sobre la situación laboral o prestación por desempleo del ejecutado, ya que dicha información sí se facilita en tiempo real, por lo que puede variar y verse alterada en un corto período de tiempo, por lo que en esos supuestos sí está justificada solicitar nueva información una vez transcurrido un tiempo prudencial que permita presumir que las circunstancias conocidas han podido verse modificadas (por ejemplo, cada mes). En definitiva, se trata de una cuestión abierta, sujeta a la valoración de las circunstancias del caso concreto, en la que deben imperar la prudencia y la moderación para intentar conciliar el innegable interés de la parte ejecutante con la carga de trabajo que soportan nuestros Tribunales, que podrían verse desbordados y colapsados si tuviesen que atender peticiones claramente desproporcionadas en ese sentido. Resolviéndose en última instancia conforme a la experiencia adquirida en casos similares.

Por otra parte, hay que señalar que para obtener la información del PNJ resulta indispensable disponer del DNI, NIE o CIF del demandado, ya que en caso de que no sea así no va a resultar posible efectuar la consulta. Normalmente se dispondrá de ese dato en el procedimiento ejecutivo o en el previo declarativo, pero no siempre es así. En caso de no disponer del mismo cabe la posibilidad de que por parte del órgano judicial se libre oficio a la Oficina de documentación de españoles y extranjeros de la Policía Nacional, facilitando los restantes datos de que se disponga del demandado para tratar de obtener dicha información. Y en alguna ocasión se ha utilizado la consulta en el padrón del INE, que facilita la información únicamente en el caso que no figure ninguna otra persona con el mismo nombre y apellidos en la localidad consultada, aunque esta práctica supone un riesgo evidente. Pero hay que tener en cuenta que a estos efectos también resultarán de aplicación las previsiones de los artículos 590 in fine LEC y también lo dispuesto en el artículo 156.2 LEC cuando señala que **"En ningún caso se considerará imposible la designación de domicilio a efectos de actos de comunicación si dicho domicilio constara en archivos o registros públicos, a los que pudiere tenerse acceso"** Por lo tanto, si el dato en cuestión consta en algún registro público, deberá ser la parte interesada quien lo aporte. Así sucedería por ejemplo con el CIF de una empresa que conste en el Registro Mercantil o en NIF de sus administradores o representantes legales. En definitiva, en estos casos la parte ejecutante deberá ingeniárselas para tratar de obtener esa información si quiere que se pueda practicar la averiguación patrimonial interesada.

Finalmente hay que indicar que el PNJ no agota las posibilidades de averiguación de otros activos de los que sea titular el ejecutado, pues hay que tener presente que existen registros que no están integrados en el PNJ como sería, por ejemplo, el Registro de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento, creado por la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, en el que se registran los seguros de vida con cobertura de fallecimiento y los seguros de accidentes en los que se cubra la contingencia de la muerte del asegurado, ya se trate de pólizas individuales o colectivas, encomendando su llevanza al Departamento de Últimas Voluntades del Ministerio de Justicia. Esta información permitirá solicitar el embargo de la cantidad que pueda generarse en caso de fallecimiento del deudor. Si bien hay que tener en cuenta que en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía no existe ningún registro administrativo en el que se inscriban con carácter general los contratos de seguros que celebran las distintas compañías aseguradas con los tomadores o asegurados.

III Segundo paso: requerimiento para la designación de bienes por el ejecutado. 589 LEC.

Otras de las actuaciones esenciales en toda ejecución cuando el ejecutante no está en condiciones de designar bienes del ejecutado es el requerimiento al propio ejecutado para que designe bienes de su titularidad. Concretamente dispone el artículo 589 LEC que en tales casos el Letrado de la Administración de Justicia *"requerirá, mediante diligencia de ordenación, de oficio al ejecutado para que manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título."*

Esta previsión legal ha quedado bastante devaluada, perdiendo parte de su sentido originario, pues se suele utilizar en la práctica como una medida de presión al ejecutado para que proceda al pago de la deuda reclamada o al menos colabore en ello facilitando la información indispensable a tal fin. El problema es que en muchas ocasiones se realiza un uso estandarizado de este mecanismo que resulta puramente formal, mecánico, un mero trámite sin mayor trascendencia, por lo que no se le saca el rendimiento que potencialmente entraña, cuando en realidad los órganos judiciales cuentan con dos potentes herramientas para incrementar esa presión frente a la parte demandada, a saber:

1º Apercibir con acudir a la vía penal: concretamente como señala el artículo 589.2 LEC apercibiendo al ejecutado con *"las sanciones que pueden imponérsele, cuando menos por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren."*

Pero es que además esta previsión se ve reforzada en el artículo 258 del Código Penal que en la actualidad tipifica expresamente la falta de aportación de información por parte del ejecutado al disponer lo siguiente: *"1. Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses quien, en un procedimiento de ejecución judicial o administrativo, presente a la autoridad o funcionario encargados de la ejecución una relación de bienes o patrimonio incompleta o mendaz, y con ello dilate, dificulte o impida la satisfacción del acreedor."*

La relación de bienes o patrimonio se considerará incompleta cuando el deudor ejecutado utilice o disfrute de bienes de titularidad de terceros y no aporte justificación suficiente del derecho que ampara dicho disfrute y de las condiciones a que está sujeto.

2. La misma pena se impondrá cuando el deudor, requerido para ello, deje de facilitar la relación de bienes o patrimonio a que se refiere el apartado anterior.

3. Los delitos a que se refiere este artículo no serán perseguibles si el autor, antes de que la autoridad o funcionario hubieran descubierto el carácter mendaz o incompleto de la declaración presentada, compareciera ante ellos y presentara una declaración de bienes o patrimonio veraz y completa.

El problema en estos casos es que muchas veces los órganos judiciales al practicar el requerimiento para designación de bienes con el ejecutado únicamente incluyen el apercibimiento por desobediencia previsto en el artículo 589.2 LEC, pero no así la previsión del artículo 258.2 CP, que es mucho más potente ya que puede llevar aparejada incluso pena de prisión. Por eso es conveniente que en la demanda ejecutiva se solicite por otrosí digo expresamente que se incluya dicho requerimiento expreso al demandado para que, en caso de que no lo cumpla en plazo, pueda solicitarse la deducción de testimonio para poder perseguir dicha conducta por la vía penal⁶. Y cerciorarse de que el requerimiento se ha practicado en esos términos antes de acudir a la vía penal.

Por otro lado, la jurisprudencia viene entendiendo que basta con un único requerimiento, no tiene que ser reiterado, aunque pueda ser aconsejable un segundo requerimiento para reforzar la aplicación del tipo. Y para ello es necesario que el acto de comunicación se practique formalmente como requerimiento conforme al artículo 152.5, pues en este caso *"en los requerimientos se admitirá la respuesta que dé el requerido, consignándola sucintamente en la diligencia."* Y se ha de practicar personalmente con el ejecutado, no con terceras personas, aunque estén habilitadas para recibir la notificación conforme al artículo 161 LEC.

2º Apercibir con la imposición de multas coercitiva periódicas. Se trata de una alternativa a la vía penal, que puede resultar incluso más efectiva, ya que el artículo 589.3 LEC permite al Letrado de la Administración de Justicia imponer mediante decreto *"multas coercitivas periódicas al ejecutado que no respondiere debidamente al requerimiento a que se refiere el apartado anterior"*.

Añadiendo dicho precepto que *"para fijar la cuantía de las multas, se tendrá en cuenta la cantidad por la que se haya despachado ejecución, la resistencia a la presentación de la relación de bienes y la capacidad económica del requerido, pudiendo modificarse o dejarse sin efecto el apremio económico en atención a la ulterior conducta del requerido y a las alegaciones que pudiere efectuar para justificarse."*

Para concluir señalando que *"frente a estas resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia cabrá recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el Tribunal que conozca de la ejecución."* Aunque en la práctica pueden suscitarse dudas, la jurisprudencia menor de las Audiencias Provinciales se muestra proclive a admitir recurso de apelación frente al auto dictado resolviendo el recurso de revisión.

Ahora bien, para imponer este tipo de sanciones, como señala el Auto de 13-1-2010 de la sección 11ª de la AP de Barcelona *"no basta con cualquier negativa; ha de ser indebida, lo que equivale a sin justa causa, sin razón"*. Esta exigencia plantea la duda de los requisitos que debe cumplir la designación de bienes. Desde luego, ante el silencio legal, la posición mayoritaria entiende que el ejecutado no necesita de postulación para cumplimentar dicho trámite. Así se infiere de otros trámites similares establecidos en la LEC, como por ejemplo la petición de nulidad del embargo del artículo 609 LEC, que puede efectuarse *"por simple comparecencia ante el Letrado de la Administración de Justicia si no se hubiera personado en la ejecución ni deseara hacerlo"*. Por lo que carecería de sentido que para un trámite más sencillo como es la designación de bienes se exija al ejecutado tener que personarse con abogado y procurador. Por lo que podrá presentar un escrito de su autoría o bien efectuar la designación mediante comparecencia ante el Tribunal.

De dicho escrito habrá que dar traslado al ejecutante, sin sujeción a plazo, a quien corresponderá la carga de probar (217 LEC) que la manifestación de bienes del ejecutado es incompleta o mendaz, lo que, como se ha visto, podría dar lugar incluso a la apertura de un proceso penal. Pero deberá valorarse en cada caso concreto el alcance de la inexactitud en la declaración de bienes del deudor.

De todas formas, este tipo de requerimientos dan escaso resultados en la práctica, convirtiéndose como se decía en un mero formalismo con carácter previo a proceder al embargo de bienes del ejecutado, que es la vía principal para lograr el cobro de las deudas dinerarias, o bien en un instrumento

IV Tercer paso: el embargo. Medidas de embargo más habituales.

Se van a exponer sucintamente a continuación las principales medidas ejecutivas que se suelen adoptar en los procedimientos de ejecución, si bien para la decisión sobre esta cuestión debe tenerse en cuenta necesariamente el orden del embargo previsto en el artículo 592 LEC que establece como principio general que, a falta de acuerdo de las partes, la traba deberá efectuarse *"procurando tener en cuenta la mayor facilidad de su enajenación y la menor onerosidad de ésta para el ejecutado."*

1º Embargo de cuentas bancarias:

Este embargo es con diferencia el más frecuente y habitual en la práctica de la actividad procesal, y está previsto en el artículo 588.2 LEC cuando señala que *"podrán embargarse los depósitos bancarios y los saldos favorables que arrojen las cuentas abiertas en entidades de crédito, siempre que, en razón del título ejecutivo, se determine por el Letrado de la Administración de Justicia una cantidad como límite máximo. De lo que exceda de ese límite podrá el ejecutado disponer libremente."* Y desarrollado en el artículo 621.2 LEC en cuanto a las medidas de garantía al disponer que *"el Letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución enviará a la entidad orden de retención de las concretas cantidades que sean embargadas o con el límite máximo a que se refiere el apartado segundo del artículo 588."*

Pero en realidad en la actualidad este tipo de embargo se practica a través de la aplicación de cuentas de consignaciones y depósitos judiciales de los Juzgados, mediante lo que se conoce como embargo de cuentas corrientes a la vista (ECCV), habiendo quedado prácticamente en desuso las previsiones del artículo 621.2 LEC que tan solo se aplicarán de forma excepcional en casos puntuales. De hecho, muchos órganos judiciales acuerdan de oficio esta medida al despachar ejecución sin necesidad de que medie petición expresa de la parte, matizando con ello el principio de impulso de parte en la ejecución civil que antes se ha analizado. En este sentido puede citarse la INSTRUCCIÓN 6/2013 de 17 de diciembre, (versión 1.1.) SOBRE MEJORA DE LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES EN EL ÁMBITO PATRIMONIAL dictada por el Secretario de Gobierno del TSJ de Murcia, que dispone expresamente lo siguiente: *"3.2. EMBARGO. De igual manera y de conformidad con el artículo 551 apartado tres 1º y el 588.2 de la LEC, los SJ acordarán de oficio en el decreto de medidas ejecutivas el embargo de depósitos bancarios y devoluciones tributarias mediante embargo telemático a través de la cuenta de consignaciones, aún cuando no haya sido interesado por la parte."*

Concretamente se trata de un "servicio desarrollado por el Consejo General del Poder Judicial en colaboración con la Asociación Española de Bancos, la Confederación Española de Cajas de Ahorro y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, que permite a los órganos judiciales ordenar embargos sobre las cuentas corrientes abiertas a nombre de una persona (física o jurídica) en cualquier entidad financiera, y la transferencia automática de las cantidades embargadas a las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales. Todo el proceso es automático. El Punto Neutro Judicial interconecta con todas las Entidades Financieras que operan en España."⁷

Este sistema que fue implementado a principios de la pasada década supuso una auténtica revolución en esta materia, potenciando extraordinariamente la eficacia del embargo del saldo bancario, ya que hasta entonces este tipo de traba se efectuaba siguiendo las previsiones del artículo 621.2 LEC remitiendo los correspondientes oficios de embargo en formato papel a las distintas entidades de crédito designadas por la parte actora, por lo que el proceso era mucho más lento y, por otro lado, se corría el riesgo de que desde la propia entidad pudiera darse aviso al ejecutado para retirar parte de sus ingresos de la cuenta, supuesto que fue denunciado en más de una ocasión pero que resultaba difícil, si no imposible, de acreditar.

En la actualidad el sistema funciona de forma automática, de manera que por parte del órgano judicial se libra una orden de embargo telemática dándola de alta a través de la aplicación de la cuenta de depósitos y consignación, y tras ello llegará directamente a las distintas entidades bancarias y de crédito adheridas mediante convenio con el CGPJ, que en la actualidad son la práctica totalidad de cuantas operan en España. El sistema, utilizando algoritmos, distribuye las retenciones entre las distintas entidades adheridas con el fin de que se produzca un reparto equitativo entre todas ellas, evitando que alguna de ellas quede especialmente marcada como "retenedora de saldos", lo que podría perjudicar a su imagen reputacional y corporativa ante sus clientes. Con esa distribución se garantiza que todas ellas soportarán de forma similar y equitativa ese tipo de actuación, de manera que por ejemplo si se da una orden de embargo frente a un ejecutado que tiene saldo suficiente para cubrir la deuda reclamada en cada una de las dos cuentas bancarias de las que es titular, es probable que el sistema no detraiga todo el importe de una sola de una de esas cuentas, sino que tome parte de cada una de las dos cuentas existentes hasta cubrir la total cantidad reclamada.

Por otro lado hay que tener en cuenta que el sistema de embargos ECCV funciona mediante un ciclo de aproximadamente 3-5 días, de manera que una vez se da de alta la orden en la aplicación, tarda ese período de tiempo en hacer el barrido entre las distintas entidades adheridas para comprobar si el ejecutado tiene saldo bancario, procediendo a transferir a la cuenta del órgano judicial (que cuenta con 16 dígitos, siendo los 4 primeros los que identifican a cada órgano judicial) las cantidades retenidas⁸. Esta forma de proceder en ocasiones ha generado problemas prácticos, pues puede ocurrir que el ejecutado acuda a reclamar la devolución de la cantidad retenida inmediatamente desde que tiene conocimiento de que el importe ha sido bloqueado en su cuenta, y sin embargo el Juzgado no podrá anular la operación porque está en fase de perfeccionarse y, por otro lado, va a tardar unos cuantos días en recibir el saldo en su propia cuenta. De manera que no queda otro remedio que esperar a recibir el importe retenido para poder efectuar su devolución en el caso de que así proceda.

Otro de los principales problemas que se plantea respecto al embargo ECCV es que no se puede registrar de forma permanente en el sistema, sino que debe reproducirse en cada ocasión cuando lo solicita la parte ejecutante. Esta circunstancia ha sido criticada por los profesionales ya que les obliga a estar solicitando de forma periódica y recurrente que se proceda a dar de alta nuevamente dicha traba. Pero, aunque parece que no deberían existir problemas técnicos para permitir un alta permanente de cuentas corrientes a la vista, lo cierto es que el CGPJ, que es el organismo encargado de impulsar e implementar las novedades tecnológicas en esta materia, no ha dado ese paso hasta la fecha. Parece ser que la principal dificultad técnica que puede plantearse a este respecto estriba en que el sistema de embargo ECCV no permite discriminar las cantidades embargadas atendiendo al origen de los ingresos, de forma que si la cuenta se nutre exclusiva o esencialmente de un sueldo, pensión u otra prestación equivalente inembargable tocaría devolver cada vez la cuantía inembargable incorrectamente trabada. Sea como fuere, lo cierto es que la única vía que existe en la actualidad para acordar el "embargo permanente" de una cuenta bancaria titularidad del ejecutado, esto es, para intervenirla, pasaría por oficiar a la entidad encargada de su gestión a fin de que tome nota y ejecute dicha orden, pero se trata de una medida excepcional y muy poco frecuente en la práctica.

En cualquier caso, la utilización de este sistema de embargo, que tan potentes resultados ha dado a los órganos judiciales de cara a poder lograr el cobro de las deudas reclamadas marcando un antes y un después, también presenta una serie de inconvenientes técnicos. El principal consiste en que a través del embargo de la cuenta bancaria del ejecutado se pueden estar trabando cantidades que conforme a otros preceptos de la LEC no resultaría susceptibles de retención. El caso paradigmático se produce cuando a través de este sistema se bloquean cantidades que en realidad corresponde con un sueldo, pensión o prestación que conforme al artículo 607 LEC resultan inembargable. Y si bien en la actualidad tras una de las últimas novedades impulsadas por el CGPJ ya resulta posible que por parte de los órganos judiciales se pueda consultar la situación de las cuentas bancarias de las que es titular la parte demandada, lo cierto es que ello obligaría a tener que consultar una a una tales cuentas antes de librar la orden de embargo ECCV, lo que no es viable por la carga de trabajo que generaría dicha actuación y la que soportan los órganos judiciales. Por ello es frecuente que en la práctica los demandados se personen en los órganos judiciales solicitando la devolución de las cantidades retenidas.

Respecto a estas peticiones de devolución de las cantidades indebidamente embargadas, no existe una regulación propia sobre cómo deben resolverse, lo que ha dado lugar a diversas prácticas en los órganos judiciales. Sí que es cierto que el artículo 609 LEC regula la nulidad radical o de pleno derecho del embargo trabado sobre bienes inembargables, señalando a este respecto que **"el ejecutado podrá denunciar esta nulidad ante el Tribunal mediante los recursos ordinarios o por simple comparecencia ante el Letrado de la Administración de Justicia si no se hubiera personado en la ejecución ni deseara hacerlo, resolviendo el Tribunal sobre la nulidad denunciada."** Pero existen argumentos para sostener que en el caso que ahora se analiza no se está ante un embargo nulo, porque la traba de la cuenta bancaria fue correctamente acordada conforme al artículo 588.2 LEC. De lo que se trata más bien de resolver sobre una reducción de embargo incardinable en el artículo 612 LEC a fin de determinar el **quántum** susceptible de traba. Por lo que bastaría con el dictado de un decreto del Letrado de la Administración de Justicia acordando la reducción del embargo en la cantidad que proceda. Siendo conveniente que antes de resolver se confiera audiencia a la parte ejecutante para que pueda pronunciarse sobre la cuestión controvertida, aunque en ocasiones en la práctica del foro se resuelve directamente cuando la cuestión ha quedado acreditada documentalmente y es evidente, sobre todo por razones de necesidad ante situaciones en que el deudor se ha quedado sin recursos para atender sus necesidades más básicas. Contra tal decreto cabría recurso de reposición y posterior revisión ante el Tribunal. Lo que no cabe duda es que el demandado no necesitará postulación para formular dicha petición de devolución, tal como se desprende del citado artículo 609 LEC que se puede aplicar por analogía al caso comentado.

La cuestión fundamental en estos casos estriba en determinar cuándo procede efectuar la devolución a la parte demandada de las cantidades que hayan podido ser retenidas de forma indebida. La respuesta la proporciona en la actualidad el apartado cuarto del artículo 588 LEC, que fue añadido por la Ley 3/18 y que dispone en la actualidad que **"cuando en la cuenta afectada por el embargo se efectúe habitualmente el abono del salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, deberán respetarse las limitaciones establecidas en esta Ley, mediante su aplicación sobre el importe que deba considerarse sueldo, salario, pensión o retribución del deudor o su equivalente. A estos efectos se considerará sueldo, salario, pensión, retribución o su equivalente el importe ingresado en dicha cuenta por ese concepto en el mes en el que se practique el embargo o, en su defecto, en el mes anterior."** Por lo tanto, la consecuencia práctica de esta previsión legal consiste en que únicamente pasará a ser inembargable el importe percibido en la última mensualidad en curso o, en su defecto, en el mes anterior, pero el resto de los importes que consten en la cuenta y que excedan de la última mensualidad cobrada tendrán la consideración de ahorro y serán susceptible de traba sin ninguna restricción. De esta forma, el legislador del año 2018 se inclinó por la tesis restrictiva, frente a la tesis expansiva defendida por algunas resoluciones de la jurisprudencia "menor" de las Audiencias Provinciales, que consideraba que en caso de que en la cuenta en cuestión únicamente se percibieran ingresos procedentes de un sueldo, pensión o prestación inembargable, todo el saldo existente en la cuenta debía tener la consideración de inembargable. Con el sistema finalmente elegido, que coincide con el criterio seguido en la legislación tributaria, se distingue nítidamente entre importe inembargable, que es exclusivamente el referido al ingreso recibido en la última mensualidad o en la anterior si en el mes en curso aún no se ha cobrado, y el resto pasa a ser saldo consolidado, esto es, ahorro, y como tal susceptible de embargo.

No obstante la claridad de la norma vigente, la casuística en estos casos sigue siendo variada, sobre todo si en la cuenta se reciben otro tipo de ingresos efectuados por la propia parte actora o sus familiares por motivos de subsistencia o para pagar determinados consumos, o si la cantidad que se ha embargado procede a su vez de un préstamo solicitado por el propio deudor. En todos estos supuestos y otros que se pueden dar, considero que habrá que realizar una interpretación teleológica del citado artículo 588.4 en relación con el 607 de la LEC a fin de valorar si el supuesto en cuestión debe entrar dentro de la protección privilegiada que el legislador ha querido brindar a ese tipo de ingresos. Cuestión distinta es que se alegue que la cantidad ingresada en la cuenta pertenece a un tercero, como sucedería cuando en la misma se cobra la pensión de alimentos de la que son titulares los hijos de la parte ejecutada, en cuyo caso la controversia que se suscite al respecto deberá resolverse aplicando el incidente del artículo 593.2 de la LEC sobre pertenencia de los bienes trabados a un tercero, señalando dicho precepto que en tal caso **"Si el tercero se opusiere razonadamente al embargo aportando, en su caso, los documentos que justifiquen su derecho, el Letrado de la Administración de Justicia, previo traslado a las partes por plazo común de cinco días, remitirá los autos al Tribunal para que resuelva lo que proceda."**

Finalmente, otro supuesto frecuente en la práctica que suele dar problemas en relación con el embargo de cuentas bancarias es el relativo a aquellos casos en que la cuenta es de titularidad conjunta de varias personas. Si todas ellas ostentan la condición de parte demandada no se suscita problema respecto a la traba, pero si sólo alguno de los cotitulares de la cuenta no tiene tal condición, surgirá la duda de qué importe del saldo puede ser objeto de traba y cuál ha de considerarse que pertenece al tercero ajeno al procedimiento. Esta concreta cuestión también fue objeto de regulación expresa tras la citada reforma del artículo 588 LEC operada por la Ley 3/18 que introdujo un nuevo apartado a dicho precepto que estable en la actualidad que ***"Cuando los fondos se encuentren depositados en cuentas a nombre de varios titulares sólo se embargará la parte correspondiente al deudor. A estos solos efectos, en el caso de cuentas de titularidad indistinta con solidaridad activa frente al depositario o de titularidad conjunta mancomunada, el embargo podrá alcanzar a la parte del saldo correspondiente al deudor, entendiéndose que corresponde a partes iguales a los titulares de la cuenta, salvo que conste una titularidad material de los fondos diferente."*** Por lo tanto, en este caso se embargará la mitad o parte proporcional del saldo, correspondiendo la carga de la prueba al tercero a efectos de acreditar que debe efectuarse un reparto distinto atendiendo a la titularidad material de los fondos, lo que podrá acreditar presentada documentación sobre el origen de los ingresos en dicha cuenta (por ejemplo, que proceden principalmente de su salario o pensión o de alguna devolución tributaria a su favor). Tampoco en este caso ha previsto el legislador la forma que debe adoptar la resolución a dictar ni el trámite a seguir, pero lo lógico es resolver la cuestión previa audiencia del ejecutante por un plazo prudencial de 5 o 10 días para que pueda posicionarse y mediante decreto contra el que cabrá reposición y posterior revisión.

2º Embargo de otros productos financieros:

Además del embargo de las cuentas bancarias, las entidades financieras y de crédito también pueden gestionar otros productos con entidad económica titularidad de la parte ejecutada, como serían, por ejemplo y sin ánimo de exhaustividad, la existencia de depósitos a plazo fijo, acciones o valores cotizados en mercados secundarios oficiales o los planes de pensiones.

Tradicionalmente en relación con este tipo de productos se planteaba el problema para su localización, porque desde su implantación por el CGPJ a principios de la década pasada el sistema de embargos ECCV se limitaba a operar en relación con las cuentas corrientes a la vista, pero dejaba fuera de órbita de actuación el resto de los productos que el ejecutado pudiera tener en las distintas entidades bancarias. En la actualidad esta deficiencia ya ha sido subsanada dado que a través del PNJ ya resulta posible efectuar la consulta de esos otros productos financieros de que pueda ser titular el ejecutado, lo que constituirá el primer paso para que se pueda solicitar su traba y que el órgano judicial pueda oficiar a la entidad que los gestione a fin de adoptar las medidas necesarias para su transformación en dinero e ingreso en la cuenta judicial para hacer pago a la parte ejecutante.

Concretamente en la actualidad la información sobre estos productos puede obtenerse del PNJ a través de la AEAT para los planes de pensiones y el Fichero de Titularidades Financieras (FTF) que proporciona datos de Titularidades Financieras mediante dos tipos de consulta: por Interviniente o por Producto Financiero. Los datos son proporcionados por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). La aplicación mostrará todas las cuentas y depósitos en las cuales intervenga o haya intervenido la persona física o jurídica cuyos datos coincidan con los datos de búsqueda cumplimentados

En relación con los depósitos bancarios y productos análogos a plazo fijo que generen réditos o rendimientos a favor de su titular, tal como se desprende del artículo 623.1 LEC, habrá que oficiar a la entidad en cuestión para que tome nota de la traba sobre tal producto a fin de realizar el traspaso a la cuenta judicial una vez que venza dicho depósito, debiendo además transferir cualquier dividendo o interés que el ejecutado deba percibir por tal producto.

En cuanto a las acciones bursátiles y otros productos cotizados, su embargo y realización es en principio relativamente sencilla, pues bastará con oficiar a la entidad donde estén depositadas a fin de que proceda a su realización en el mercado en que coticen, señalando el artículo 623.2 LEC a este respecto que ***"cuando se trate de valores o instrumentos financieros que coticen en mercados secundarios oficiales, la notificación del embargo se hará al órgano rector a los mismos efectos del párrafo anterior, y, en su caso, el órgano rector lo notificará a la entidad encargada de la compensación y liquidación."***

Por último, por lo que respecta a los planes de pensiones, para hacer efectiva la traba habrá que librar orden de embargo a la entidad encargada de su llevanza para que proceda a su anotación y la haga afectiva una vez se genere el devengo a favor del deudor. De esta forma, cuando la entidad gestora recibe la orden de embargo, tendrá que efectuar una anotación sobre los derechos del deudor que dará lugar a que, cuando venza el plan de pensiones o se solicite su rescate (por ejemplo, dentro de 15 o 20 años), se proceda en ese momento a materializar la orden de embargo anotada en su momento.

Sobre la constitucionalidad de este tipo de embargo se pronunció expresamente la sentencia del TC 88/2009 de 20 de abril, que declaró la validez de la siguiente previsión de actual artículo 8.8 del Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, en cuya virtud ***"los derechos consolidados del partícipe en un plan de pensiones no podrán ser objeto de embargo, traba judicial o administrativa, hasta el momento en que se cause el derecho a la prestación o en que sean disponibles en los supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga duración o por corresponder a aportaciones realizadas con al menos diez años de antigüedad."***

Por último, respecto a la concreta forma de hacer efectiva la traba sobre estos planes de pensiones, por su propia naturaleza, hay que tener en cuenta que podrán resultar de aplicaciones las previsiones del artículo 607 LEC en función cómo se vaya a cobrar el importe consolidado. En este sentido razona el Auto de 26-6-2002 de la sección 1ª de la Audiencia Provincial de Santander que *"llegado el evento de la prestación, y sobre la suma retenida procederá la efectividad de la traba para satisfacción de la deuda, con los límites, en su caso, que procedan. Nótese que si fuera por fallecimiento del titular, podría realizarse sobre la totalidad, mientras que si lo fuera por otra causa como la jubilación o invalidez quizás habrían de considerarse otros parámetros como las escalas del art. 607 de la LEC. así como también tener presente si la prestación es de capital, renta o mixta."*

3º Embargo de devoluciones tributarias de la AEAT:

Otra de las principales vías para lograr el cobro de las cantidades reclamadas en una ejecución civil pasa por el embargo de las devoluciones tributarias que puedan corresponder al ejecutado. A este respecto hay que tener en cuenta que la devolución puede ser ordenada por la AEAT o por la entidad autonómica con competencias transferidas (País Vasco, Navarra, etc).

En el caso de la AEAT este tipo de embargo se practica directamente por el órgano judicial a través de la aplicación de la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales. La principal característica de este tipo de retenciones consiste en que una vez dada de alta en el sistema la orden de embargo se va a mantener vigente hasta tanto no se proceda a su cancelación por el propio órgano judicial, de manera que a diferencia del embargo de cuentas a la vista ECCV, en el caso de devoluciones tributarias de la AEAT no resulta necesario solicitar periódicamente que se proceda a su alta porque ya consta debidamente registrada. Ahora bien, sí es importante que por la parte ejecutante se solicite al órgano judicial que se cerciore de que se ha efectuado dicha alta de forma efectiva, pues de otro modo cabe el riesgo de que se produzca la devolución tributaria al interesado sin que resulte grabada.

Por otro lado, desde el punto de vista práctico se plantea la duda de si, en caso de que la deuda reclamada se cobre parcialmente a través de una retención de devoluciones tributarias de la AEAT, resulta o no necesario que se dé de alta nuevamente la orden de embargo en el sistema para hacerla efectiva sobre las cantidades pendientes. La respuesta a esta cuestión, desde la experiencia práctica, tal y como funciona el sistema en la actualidad, es que no está claro cómo actúa y qué criterios sigue la aplicación, pues lo cierto es que en ocasiones el sistema reenvía automáticamente la orden por las cantidades pendientes de abono, pero ello no ocurre en todos los casos, por lo que es posible que tras dicho pago parcial la orden haya sido dada de baja definitivamente, lo que exigirá que el órgano judicial tenga que generarla de nueva para que se haga efectiva sobre el resto de cantidades pendientes de abono. Ante estas circunstancias lo más aconsejable es que, en caso de un embargo parcial de las cantidades reclamadas, la parte ejecutante solicite nuevamente que se proceda a registrar la orden de embargo, pues no todos los órganos judiciales se cercioran de si la orden sigue activa o la vuelven a registrar de oficio por las cantidades pendientes de pago.

Uno de los principales problemas prácticos que se suscitan en la actualidad en relación con el embargo de las devoluciones tributarias es el relativo a si las retenciones que se practican por esta vía sobre anticipos por deducciones por maternidad, familiares u otros beneficios fiscales resultan o no susceptibles de ser trabados, pues podría plantearse su exclusión al amparo del artículo 4 del RDL 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras medidas de carácter económico, que declara parcialmente inembargables, con sujeción al artículo 607 LEC, determinadas ayudas y prestaciones públicas. La clave para responder a esta cuestión estriba en la propia naturaleza de los importes trabados, ya que se está ante en todo momento ante una devolución tributaria, concepto que no se ve alterado cualquiera que sea el motivo de la devolución tributaria, de forma que el pago por la AEAT se fundamenta en el carácter objetivo de la devolución y no en las circunstancias subjetivas o nivel de renta del beneficiario de la devolución⁹. Por lo que, en conclusión, hay que considerar que ese tipo de devoluciones también podrán ser objeto de embargo pudiendo entregar las cantidades retenidas a la parte actora sin ningún obstáculo.

A nivel teórico puede plantearse la duda de si en el caso de que el demandado únicamente perciba una prestación, pensión o sueldo inferior a los límites del artículo 607 LEC, la devolución tributaria devengada o generada con cargo a dichos estipendios podría ser o no susceptible de retención. Pero en mi opinión también en ese caso la devolución sí puede ser entregada a la parte ejecutante, y ello por varias razones. En primer lugar, por la previsión del artículo 607.5 LEC cuando dispone que **"si los salarios, sueldos, pensiones o retribuciones estuvieron gravados con descuentos permanentes o transitorios de carácter público, en razón de la legislación fiscal, tributaria o de Seguridad Social, la cantidad líquida que percibiera el ejecutado, deducidos éstos, será la que sirva de tipo para regular el embargo."** Es decir, que el propio legislador ya ha excluido el importe retraído por la administración tributaria para calcular el montante sobre el cual puede calcularse la retención salarial, por lo que de considerar que la devolución tributaria no puede ser objeto de embargo se estaría beneficiando doblemente a la parte demandada de forma indebida. Por otro lado, el objeto de protección del artículo 607 LEC se circunscribe exclusivamente al **"salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente"** y ello tiene como finalidad esencial garantizar que el demandado pueda atender a sus necesidades más básicas y elementales (alimento, vestido, vivienda, etc) de una manera digna que garantice su subsistencia. Pero las devoluciones tributarias no parece que puedan encuadrarse dentro de ese ámbito de protección hiper privilegiado, porque tienen una naturaleza distinta, obedeciendo a la restitución de la cantidad retenida en exceso por la Administración Tributaria, por lo que esa cantidad ya ha perdido su condición salarial o análoga, no tiene una finalidad "retributiva" directa. Por último, puede aportarse un argumento adicional acudiendo por analogía al supuesto del embargo de las cantidades ingresadas en la cuenta del ejecutado, como antes se ha expuesto. En tales casos el dinero que se recibe en la cuenta resultará inembargable en relación con los ingresos recibidos el último mes y, en su defecto, en el mes anterior, pero la cantidad restante pasa a considerarse ahorro, muta su naturaleza, y puede ser objeto de traba sin restricción. Pues bien, en el caso de la devolución tributaria pasa algo similar, pues si bien la retención de la AEAT tiene su fundamento y razón de ser en las percepciones salariales o análogas de las que es beneficiario ese contribuyente, lo cierto es que una vez efectuada la retención, ese importe ve alterada su naturaleza de manera que ya no se está ante una retribución, sino ante una devolución del exceso retenido que, como tal, no está amparada por la protección del 607 LEC y por lo tanto podría ser perfectamente objeto de retención.

4º Embargo sueldos, pensiones y otras prestaciones. Especialidades del artículo 607 LEC.

El embargo de sueldos y prestaciones equivalentes constituye una de las medidas más efectivas con que cuenta el órgano judicial para lograr el cobro de la cantidad reclamada, y se acuerda con frecuencia pese a que el artículo 592 LEC lo sitúa en octavo lugar incluso tras el embargo de los bienes muebles e inmuebles.

La regulación básica de este tipo de traba se desarrolla en el artículo 607 LEC, que comienza declarando con carácter general en su apartado primero que **"es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional"**, para, a continuación, fijar en su apartado segundo una escala de retención atendiendo al porcentaje en que los emolumentos superen el salario mínimo interprofesional aumentando el porcentaje de retención en cada tramo hasta llegar a un 90% para los tramos que superen un quinto salario mínimo interprofesional.

Para calcular la retención a practicar hay que partir del neto, es decir, una vez deducidas las cargas que pesan sobre el mismo, pues el apartado quinto del artículo 607 señala a este respecto que **"Si los salarios, sueldos, pensiones o retribuciones estuvieron gravados con descuentos permanentes o transitorios de carácter público, en razón de la legislación fiscal, tributaria o de Seguridad Social, la cantidad líquida que percibiera el ejecutado, deducidos éstos, será la que sirva de tipo para regular el embargo"**. Pero hay que tener presente que como ha establecido la jurisprudencia menor de las Audiencias Provinciales, en teoría no resulta posible practicar más de una retención judicial o administrativa a la vez sobre un mismo salario o prestación, sino que todo el importe que resulte embargable conforme a la escala del artículo 607.2 LEC deberá aplicarse al primer crédito que haya tenido acceso a la empresa o entidad retenedora (principio de prioridad temporal), y una vez saldada dicha deuda, se pasará a aplicar la retención a las restantes deudas que hayan sido anotadas.

A este respecto se puede plantear la duda de si una vez cubierto el principal reclamado, si se tasan los intereses y costas y su importe excede del inicialmente presupuestado (un 30% de principal según el 575 LEC normalmente), tal exceso de intereses y costas también gozaría de la misma preferencia temporal que el principal o si, por contra, se antepondrían al cobro las órdenes de embargo posteriores que se hayan podido recibir. En mi opinión ese exceso de intereses y costas sí deben gozar de la misma prioridad temporal que la inicial orden de embargo remitida, porque en dicha comunicación se indicaba ya que se trataba de una cantidad presupuestada y pendiente de liquidar, de manera que lo lógico es que la protección se extienda también a tales importes. Para ello será necesario que una vez liquidados los intereses y costas el órgano judicial libre un nuevo oficio a la entidad retenedora para que tome nota de los importes pendientes de abono por tales conceptos, continuado con las retenciones, aunque haya cargas posteriores, de forma que únicamente cuando quede saldada completamente deuda reclamada por todos los conceptos se podrá proceder al pago de las restantes órdenes de embargo recibidas.

Para hacer efectivo este tipo de embargos hay que librar oficio a la entidad retenedora, que en ocasiones puede ser difícil de localizar. Para ello se utiliza cada vez con más frecuencia el correo electrónico oficial del Juzgado. En cualquier caso, si se practica la notificación y la empresa pagadora no efectúa los ingresos en la cuenta de consignaciones se podrá solicitar al Juzgado que active el mecanismo del artículo 591 de la LEC apercibiendo a dicha entidad con la posible imposición de multas coercitivas periódicas hasta que atienda el requerimiento judicial, pudiendo además apercibir expresamente de la posibilidad de deducir testimonio por desobediencia judicial. Para la imposición de la multa coercitiva periódica una buena práctica consiste en citar al legal representante de la empresa retenedora para que exponga las concretas razones por las que no ha atendido el requerimiento del Juzgado y si no comparece o no da razones suficientes, entonces ya imponer la correspondiente multa.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el órgano judicial se limita a remitir la orden de retención incluyendo las instrucciones para su práctica (la escala del apartado segundo del artículo 607 LEC) pero es la propia entidad retenedora la que practica materialmente las operaciones necesarias para concretar la cantidad a retener e ingresar mensualmente en la cuenta del órgano judicial. Por ello en ocasiones pueden suscitarse discrepancias en torno a la cantidad exacta a retener e ingresar en la cuenta del Juzgado, cuestionándose por la parte ejecutante que se esté practicando correctamente el embargo ordenado por el Juzgado. En estos casos es habitual que se solicite a la empresa o entidad pagadora que remita copia de las tres últimas nóminas del demandado a fin de poder comprobar que la retención se ha practicado correctamente, información que no estaría amparada por la normativa en materia de protección de datos de carácter personal dado que se trata de una información indispensable para poder verificar que el mandato judicial se está cumpliendo correctamente.

Una duda práctica que se presenta en ocasiones respecto a la forma en que debe practicarse este tipo de retenciones es la relativa a cómo se debe aplicar el cálculo del SMI, pues el mismo se puede calcular tanto por meses como en cómputo anual. Y también pueden surgir dudas sobre cómo se deben aplicar las pagas extras. Para 2021 el salario mínimo interprofesional (SMI) está prorrogado, estando fijado en 13.300 euros anuales, lo que corresponde a 950 euros mensuales en 14 pagas o 1.108,33 euros mensuales en 12 pagas. Las pagas extra pueden estar o no prorrateadas, lo que deberá tenerse en cuenta para calcular la retención. Respecto a esta cuestión se ha suscitado una polémica importante con la TGSS en cuanto a la fórmula de aplicar las pagas extras en relación con las pensiones, dado que no se obtiene el mismo resultado si se considera que los pensionistas perciben 14 pagas, aplicando el límite del 607 LEC a cada una de ellas, que si se entiende que en realidad perciben 12 pagas, con dos meses de extra, ya que en esos dos meses la retención resultará mucho más elevada, siendo esta la interpretación que aplicó en la última retención de diciembre de 2020.

Dos especialidades que se contemplan expresamente en el artículo 607 LEC en relación con este tipo de embargo son las relativas a la reducción del embargo por cargas familiares y la acumulación de prestaciones.

En relación con el primer supuesto hay que destacar que el legislador ha previsto que la traba pueda reducirse entre un 10 y un 15 por 100 atendiendo a las cargas familiares del ejecutado. Se trata de un concepto jurídico indeterminado que ha dado lugar a que en la jurisprudencia menor de las Audiencia Provinciales se hayan sostenido dos tesis contrapuestas: una primera sosteniendo una interpretación restrictiva, limitando la aplicación de la reducción a las cargas generadas por la necesidad de atender a las necesidades familiares del ejecutado (por ejemplo, pago de alimentos de los hijos, dependencia, familia numerosa, etc.), pero no a las que soporte el propio demandado por motivos distintos, como sería una hipoteca o préstamos personales (ejemplo: Auto de la sección 4ª de la AP de Granada de 23-10-2009) En cambio, para la otra corriente cabría realizar una interpretación amplia que incluya otros factores relacionados directamente con el propio ejecutado ya que lo que pretende la norma es proteger al deudor cuando está sujeto a otras cargas ajenas a su salario que pueden dificultar que pueda atender correctamente a sus obligaciones (ejemplo: Auto de la sección 3ª de la AP de Mérida de 26-11-2004)

En cualquier caso, de aceptarse la aplicación de la reducción se suscita la duda práctica sobre cómo debe materializarse la reducción. A este respecto hay que tener en cuenta que la reducción acordada no se aplica directamente sobre la cantidad obtenida tras aplicar los porcentajes, sino directamente sobre los propios porcentajes de retención. Por ejemplo, si el porcentaje de retención para el primer tramo del artículo 607.2 es de un 30% y se concede en el decreto resolutorio una reducción de un 10% por las cargas familiares, el porcentaje de retención se quedaría en un 20% total. Ese es el verdadero sentido del precepto cuando habla de "aplicar una rebaja de entre un 10 y un 15 por ciento en los porcentajes establecidos en los números 1º, 2º, 3º y 4º del apartado 2". Pero hay quien sostiene que en realidad la reducción debería aplicarse en realidad sobre el valor del porcentaje en cuestión, lo que puede arrojar distintos resultados¹⁰.

En cuanto a la posibilidad de acumular diversas prestaciones que perciba el ejecutado, dispone el artículo 607.3 LEC que **"Si el ejecutado es beneficiario de más de una percepción, se acumularán todas ellas para deducir una sola vez la parte inembargable. Igualmente serán acumulables los salarios, sueldos y pensiones, retribuciones o equivalentes de los cónyuges cuando el régimen económico que les rija no sea el de separación de bienes y rentas de toda clase, circunstancia que habrán de acreditar al Letrado de la Administración de Justicia."** Las dudas prácticas que se plantean en este caso estriban en cómo materializar esta acumulación, siendo lo aconsejable oficiar a la entidad retenedora cuya prestación sea previsible que pueda cesar o concluir antes, informándola del importe del otro ingreso que percibe el deudor. Por ejemplo, si el demandado percibe una pensión y un salario reducido, lo lógico será oficiar a la empresa que abona el salario dado que la pensión tiene mayor vocación de permanencia. En cualquier caso, es importante notificar esta traba al ejecutado apercibiéndole de que debe poner en conocimiento del órgano judicial el cese de cualquiera de las prestaciones que reciba para que deje de aplicarse la acumulación acordada.

También respecto a este precepto se pueden plantear incógnitas en el caso de que tras comunicar la traba al matrimonio se otorgue inmediatamente una escritura de separación de bienes, y concretamente si dicha operación podría haberse efectuado un fraude de ley para evitar la acumulación. El problema en estos casos es que el citado precepto es tajante al excluir la acumulación en caso de se acredite la separación de bienes entre los cónyuges, sin fijar el requisito de que dicho régimen tenga que ser previo o anterior a la comunicación del apremio, por lo que en tales casos no quedaría más remedio que dejar sin efecto la acumulación acordada. Correspondiendo en su caso al ejecutante la carga de la prueba a efectos de acreditar que dicha separación resulta fraudulenta.

Un supuesto particular en relación con la acumulación es el relativo al novedoso ingreso mínimo vital, creado por el Real Decreto-Ley 20/20, suscitándose el interrogante acerca de si el mismo es o no susceptible de traba. A este respecto, pese a su denominación hay que concluir que no cabe duda de que dicho ingreso deberá computarse como un ingreso o prestación más del ejecutado susceptible de acumularse a otras prestaciones que perciba, de forma que resultará de aplicación la citada previsión del artículo 607.3 LEC.

También se han suscitado dudas acerca de si las dietas que perciben los trabajadores deben incluirse o no como parte del salario percibido por el trabajador. Sobre este particular no existe una respuesta tajante y definitiva, pues la cuestión dependerá en buena medida de la naturaleza que se otorgue a dicha figura, de manera que: si se considera como una indemnización o compensación por gastos suplidos por el trabajador, quedarían exentas y no serían susceptibles de traba (en este sentido, por ejemplo, Sentencia 11-10-2017 de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra). En cambio, si se conceptúa como una percepción económica ajena e independiente al salario, sería plenamente embargable y sin limitación o restricción alguna dado que no existe ninguna excepción legal que declare expresamente su inembargabilidad (en este sentido, Auto 16-9-2004 de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Guadalajara). En cualquier caso, incluso en el primer supuesto lo que sí parece claro es que deberá atenderse al caso concreto y a la prueba que se pueda aportar por las partes en el correspondiente incidente para decidir sobre esta cuestión, puesto que la jurisprudencia sí se muestra unánime acerca de entender que si la dieta se utiliza indebida y subrepticamente como fórmula de retribución, sin que resulte acreditado el gasto suplido, no habría impedimento para su traba, aunque computándola dentro del salario globalmente considerado y con los límites de artículo 607.2 LEC.

Respecto al finiquito o indemnización por despido, también se suscitan dudas acerca del régimen que resulta aplicable. A este respecto habrá que atender al origen y naturaleza de la cantidad abonada al trabajador. Si se trata de percepciones salariales, como por ejemplo mensualidades pendientes de percibir, prorrateo de pagas extras o abono de vacaciones no disfrutados, procederá aplicar sobre dicho importe la escala del artículo 607.2 LEC. Pero si se está ante la indemnización por despido estrictamente considerada, sería susceptible de embargo sin restricción, pues el artículo 26.2 del Estatuto de los Trabajadores dispone expresamente que **"no tendrán la consideración de salario las cantidades percibidas por el trabajador en concepto de indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como consecuencia de su actividad laboral, las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social y las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos."**

Por este mismo motivo, en ocasiones se solicita de los órganos judiciales que se proceda a embargar las prestaciones que el FOGASA tenga pendientes de abonar al trabajador despedido. Respecto a esta medida se podría discutir si podría ser contraria a la previsión del artículo 588.1 LEC cuando señala que **"será nulo el embargo sobre bienes y derechos cuya efectiva existencia no conste"** dado que en el momento de solicitarse la traba no consta aún si el demandado ha generado el derecho a percibir la prestación de dicho organismo, pero en mi opinión debe considerarse que se trata de un embargo similar a las devoluciones tributarias, dado que hay indicios sólidos de que el demandado puede llegar a percibir ese importe ante el hecho cierto de su despido, por lo que denegar dicha medida no estaría justificado.

En el ámbito de las ejecuciones de familia hay que tener en cuenta que en determinados supuestos puede reclamarse el cobro de las pensiones de alimentos al Fondo de Garantía del Pago de Alimentos. Como se informa en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dicho fondo fue creado por la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, y su funcionamiento se desarrolló por Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre. Se trata de un fondo carente de personalidad jurídica, que tiene como finalidad garantizar a los hijos menores de edad el pago de los alimentos reconocidos e impagados establecidos en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial dictada en los procesos de separación, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, filiación o alimentos, mediante el abono de una cantidad que tendrá la condición de anticipo. Para poder solicitar dicha prestación resulta necesario solicitar el correspondiente certificado al órgano judicial que acredite el importe de los alimentos impagados y que se han agotado las medidas para intentar su cobro mediante la exacción del patrimonio del ejecutado. Y, además, una vez abonados dichos alimentos por el Estado, éste podrá repetir contra el propio obligado al pago subrogándose en los importes abonados que podrán ser reclamados a través de la AEAT (artículo 24 del RD 1618/2007).

Igualmente, en el ámbito de las ejecuciones de familia hay que tener en cuenta la relevante especialidad que contempla artículo 608 LEC que permite al Tribunal fijar mediante auto motivado la cantidad concreta a retener pudiendo rebasar los límites de la escala del artículo 607.2 LEC. El problema práctico que se suscita en estos casos consiste en determinar si dicho límite resulta aplicable tan solo al pago del principal o si también lo será para el abono de los intereses y costas, siguiéndose criterios distintos sobre esta cuestión en los órganos judiciales. En mi opinión, a pesar de que el INEM-SPEE sólo aplica el artículo 608 LEC al principal, también debería resultar extensivo a los intereses y las costas porque se trata de obligaciones accesorias que forman parte del título ejecutado, por lo que debería recibir idéntico trato privilegiado. Por otro lado, en estos casos hay que tener en cuenta que la orden de embargo dictada por el Tribunal al amparo del artículo 608 LEC no tiene reconocida una prioridad frente a otras cargas que pesen sobre el salario o prestación del ejecutado. Pero dado que en auto a dictar se ha de fijar la cantidad que debe ser trabada, su aplicación será absoluta, de forma que si esta orden de retención coincide con otras cargas o retenciones que se estuviesen practicando previamente sobre el salario o pensión, por ejemplo otra retención judicial ordinaria, deberá aplicarse en todo caso el descuento ordenado al amparo del artículo 608 LEC, cualquiera que sea el importe que le reste por percibir al ejecutado, y sin perjuicio de que éste pueda alegar dicha circunstancia ante el Tribunal para que se valore nuevamente el quantum de la retención a fijar.

Finalmente hay que tener en cuenta que en relación con la ejecución post hipotecaria del artículo 579 LEC, esto es, cuando la ejecución hipotecaria continua como ordinaria, se contiene una importante especialidad en el RDL 8/2011 de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, pues en dicha norma se aumenta el límite exento en el caso de embargo de sueldos o pensiones consecuencia de ejecuciones hipotecarias frente al régimen general del artículo 607 LEC cuando el inmueble objeto del procedimiento haya sido la vivienda habitual de los ejecutados. En tales supuestos dispone dicha normativa especial que ***"la cantidad inembargable establecida en el artículo 607.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se incrementará en un 50 por ciento y además en otro 30 por ciento del salario mínimo interprofesional por cada miembro del núcleo familiar que no disponga de ingresos propios regulares, salario o pensión superiores al salario mínimo interprofesional. A estos efectos, se entiende por núcleo familiar, el cónyuge o pareja de hecho, los ascendientes y descendientes de primer grado que convivan con el ejecutado."*** Por la doctrina se ha criticado expresamente que esta previsión legal no se haya incluido en la propia LEC, y concretamente en el artículo 607 LEC, lo que puede dar lugar a que se omita su aplicación por parte del órgano judicial, por lo que se trata de un aspecto que deberá analizar detenidamente la defensa de la parte ejecutada si es que está personada en las actuaciones. Para llevar a efecto esta retención privilegiada habrá que librar oficio a la empresa, informando de dicha circunstancia para que aplique los porcentajes especiales directamente. Pero si se suscita controversia entre las partes o a instancia de la parte ejecutante por no estar conforme con la cantidad retenida, habrá que resolver la cuestión de forma incidental en la propia ejecución a la vista de las circunstancias que resulten acreditadas, mediante decreto revisable. El carácter de vivienda habitual tendrá que haber quedado acreditado en la previa ejecución hipotecaria.

5º Embargo de vehículos y otros bienes muebles.

La traba y realización de los vehículos, especialmente en el caso de los coches o turismos, es una opción de apremio que no se da con excesiva frecuencia en la práctica a pesar de que puede suponer una fuente de ingresos relevante con la que hacer pago de la deuda reclamada, ya que existe un activo mercado de vehículos de segunda mano que puede dar lugar a que con su venta en pública subasta se obtenga una cantidad significativa.

El principal problema práctico que presentan los vehículos es el de su rápida depreciación, porque están expuestos a un uso intensivo, por lo que en caso de constatar que se trata de vehículos con una matrícula antigua, de más de diez años, habrá que valorar detenidamente si su traba puede llegar a resultar aconsejable, pues hay que tener presente que conforme al artículo 643.2 LEC ***"no se convocará subasta de bienes o lotes de bienes cuando, según su tasación o valoración definitiva, sea previsible que con su realización no se obtendrá una cantidad de dinero que supere, cuando menos, los gastos originados por la misma subasta"***. Por lo que los vehículos excesivamente antiguos, y que no hayan adquirido valor histórico, no resultan atractivos de cara a su embargo, sobre todo si es presumible que sobre los mismos pesen cargas previas y preferentes inscritas en el correspondiente Registro de Bienes Muebles. En el PNJ podrá comprobarse el historial de embargos del vehículo y otros datos de interés sobre esta cuestión.

Una vez decretado el embargo de los vehículos en el correspondiente decreto, procede librar mandamiento al Registro de Bienes Muebles. Y normalmente deberá procederse a su valoración por perito judicial conforme a lo dispuesto en los artículos 637 y siguientes de la LEC, ya que la previsión del artículo 634 LEC respecto a la posibilidad de entrega directa al ***ejecutante "por el valor que resulte de las tablas o índices referenciales de depreciación que se hubieran establecido en el contrato"*** está limitada en realidad a la ***"ejecución de sentencias que condenen al pago de las cantidades debidas por incumplimiento de contratos de venta a plazos de bienes muebles"***, aunque la jurisprudencia menor de las Audiencias Provinciales también ha admitido su aplicación cuando la reclamación procede de un monitorio (por ejemplo, Auto de 28-5-2012 de la sección 7 de la AP de Algeciras), pero siempre y cuando se trate de bienes muebles vendidos o financiados a plazos. Fuera de esos supuestos la realización de los vehículos deberá efectuarse a través de la correspondiente subasta o las vías alternativas de realización legalmente previstas.

Otra de las grandes dificultades prácticas que plantea el embargo de vehículos es la relativa a su localización, pues obviamente no basta con la declaración jurídica de que el vehículo ha sido embargo (conforme recuerda el artículo 587 LEC ***"El embargo se entenderá hecho desde que se decreta por el Letrado de la Administración de Justicia o se reseñe la descripción de un bien en el acta de la diligencia de embargo, aunque no se hayan adoptado aún medidas de garantía o publicidad de la traba"***), sino que en estos casos se impone su localización para poder constatar su existencia física y acordar su depósito conforme a las normas de los artículos 626 y siguientes hasta que se proceda a su enajenación forzosa y entrega al nuevo propietario. En el caso de la ejecución hipotecaria el artículo 687 LEC configura la aprehensión de los vehículos pignorados como un requisito de procedibilidad.

Los vehículos, por su movilidad intrínseca, pueden resultar difíciles de localizar. En el caso de que el deudor haya sido notificado en el curso de la ejecución y tenga domicilio conocido, tras practicar el oportuno requerimiento, si no procede a entregar voluntariamente el vehículo se puede solicitar que se libere mandamiento al servicio común correspondiente para que proceda a su localización, precinto y entrega a depositario designado. En el supuesto de que el ejecutado esté en ignorado paradero, lo más recomendable es oficiar a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que procedan a la localización y precinto del vehículo. Lo más práctico a estos efectos es acudir a la Policía Local del municipio en cuestión, pues ese cuerpo policial suele tener unos tiempos de respuesta más rápidos y además dispone de recursos adicionales para tratar de averiguar el paradero del vehículo y de su propietario por el conocimiento de su entorno (puede entrevistarse con familiares, vecinos, etc). Pero si esa medida no resulta efectiva, no quedará otro remedio que oficiar a la Guardia Civil de Tráfico para que incluya el vehículo en la base de datos S.I.G.O., que son las siglas de Sistema Integrado de Gestión Operativa, Análisis y Seguridad Ciudadana. Este sistema tiene como función fusionar toda la información de interés policial en un solo punto, dando lugar a una base de datos de la Benemérita o registro sobre delitos, delincuentes, automóviles y diligencias policiales. La inclusión en este registro policial permitirá que, si en cualquier momento se localiza al vehículo al practicar cualquier diligencia por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, les aparezca automáticamente el aviso de que existe una orden de precinto por un Juzgado y se proceda a su ejecución inmediata. Por ello mismo resulta imprescindible que con carácter previo a librar tal comunicación se haya designado al depositario y conste su teléfono móvil de contacto a fin de que pueda ser informado para acudir sin dilación a retirar el vehículo, pues en el caso de que quede en la vía pública existe el grave riesgo de que pueda sufrir deterioro o cualquier otra eventualidad que lo perjudique.

Por otra parte, una cuestión relevante respecto al proceso de realización de los vehículos es la relativa a que el depositario debe permitir siempre su inspección por los licitadores que estén interesados, facilitando para ello sus datos de contacto, tal y como se desprende del artículo 627 LEC cuando señala que depositario queda obligado a exhibir el bien depositado en las condiciones que fije el Letrado de la Administración de Justicia). Además, hay que cerciorarse en todo caso de que se disponen de las llaves y la documentación del vehículo (permiso de circulación, etc), informando sobre dichas circunstancias de forma destacada en el edicto de la subasta tal y como se desprende del artículo 668 LEC (***"cuantos datos y circunstancias sean relevantes para la subasta..."***), pues en otro caso el adquirente tendrá que asumir los gastos necesarios para obtener los correspondientes duplicados. Por otro lado también es importante informar de forma destacada y dejar constancia que el adquirente se subrogará en las multas y tributos (impuesto de circulación) que pesen sobre el vehículo en cuestión, pues si no se liquidan tales cargas es posible que la DGT se niegue a inscribir el vehículo a favor del nuevo titular, siendo por otro lado que no se trata de cargas registrales a los efectos del artículo 666 LEC, por lo que no es tener en cuenta su importe a efectos de practicar el avalúo del bien mediante la diligencia de liquidación de las cargas.

Otra duda práctica que tradicionalmente se ha planteado en relación con los vehículos es la relativa a si para su licitación deben aplicarse las normas propias de la subasta de bienes muebles o las propias de los inmuebles. El interrogante se suscita porque el artículo 655 LEC señala que las especialidades de las subastas de inmuebles se aplicarán también ***"a las de bienes muebles sujetos a un régimen de publicidad registral similar al de aquéllos"***, lo que ha dado lugar a que mayoritariamente se haya sostenido que deben aplicarse también a la licitación de los vehículos, aunque también se ha sostenido que podrían aplicarse las normas sobre subastas de bienes muebles atendida la propia naturaleza. Siendo que no se trata de una cuestión baladí, pues afectará directamente a los porcentajes por los que debe adjudicarse el vehículo en cuestión. En cualquier caso, en el anteproyecto de ley de eficiencia procesal del sistema público de justicia se toma partido sobre esta polémica acordándose que la normativa sobre subastas de bienes muebles se aplicará también a los vehículos y demás bienes inscritos en el Registro de bienes muebles.

Por lo demás señalar finalmente que en relación con el resto de los bienes muebles susceptibles de embargo, su práctica resulta cada vez más excepcional quedando como una actuación residual ante la falta de otros bienes de más fácil realización. Por un lado, hay que tener en cuenta las limitaciones al embargo de esos posibles bienes que pueden derivarse del artículo 606 LEC que, por ejemplo, declara inembargables los siguientes bienes:

"1.º El mobiliario y el menaje de la casa, así como las ropas del ejecutado y de su familia, en lo que no pueda considerarse superfluo. En general, aquellos bienes como alimentos, combustible y otros que, a juicio del tribunal, resulten imprescindibles para que el ejecutado y las personas de él dependientes puedan atender con razonable dignidad a su subsistencia.

2.º Los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el ejecutado, cuando su valor no guarde proporción con la cuantía de la deuda reclamada."

Sobre la forma de proceder en estos casos resulta de interés el Auto de 14-01-2005 de la sección 2ª de la Audiencia Provincial de Lleida, que destaca que para decidir sobre el embargo en estos casos hay que valorar dos extremos: qué bienes resulta estrictamente necesarios para el desarrollo de la actividad y si el valor de los mismos guarda proporción con la deuda reclamada, destacando esta resolución que *"se trata, sin duda, de conceptos un tanto imprecisos y por ello la concurrencia de ambos requisitos determinantes de la inembargabilidad habrá de apreciarse en relación con el caso concreto, analizando y ponderando si se cumplen o no tales requisitos, lo que podrá hacerse en el momento de la práctica de la diligencia de embargo o en un momento posterior en el caso de que resultare preciso disponer de una valoración pericial de los bienes embargados para poder determinar si su importe resulta desproporcionado en relación con la deuda, y todo ello sin perjuicio de que en el momento de practicarse la traba o con posterioridad tanto el ejecutante como el ejecutado puedan efectuar las alegaciones que estimen procedentes en orden a la embargabilidad o inembargabilidad de un concreto bien, y para el caso de que se considere que algún bien se ha embargado indebidamente podrá entonces decretarse la nulidad del embargo, bien de oficio (art. 609 en relación con el art. 227 LEC) o bien a instancia del ejecutado que podrá denunciar la nulidad de la traba por la vía del art. 609 LEC (posibilidad ésta que se contempla incluso para el caso de que no estuviera personado en la ejecución)"*

Fuera de esos supuestos, en ocasiones se solicita que se embargue el efectivo que se pueda localizar en la caja registradora de una empresa o comercio (como bares, etc), o por ejemplo la maquinaria de una mercantil que se encuentre en buen estado y pueda tener cierto valor, o incluso ganado y otros semovientes. En estos supuestos hay que tener en cuenta que el embargo se entenderá hecho desde que se reseñe en el acta de la diligencia de embargo extendida por el correspondiente servicio común, que deberá contener una descripción exhaustiva en los términos que especifica el artículo 624 LEC: *"descripción, lo más detallada posible, de su forma y aspecto, características principales, estado de uso y conservación, así como la clara existencia de defectos o taras que pudieran influir en una disminución de su valor. Para ello se utilizarán los medios de documentación gráfica o visual de que la Oficina judicial disponga o le facilite cualquiera de las partes para su mejor identificación."*

Pero la realidad es que la práctica tradicional de enviar a la comisión judicial a embargar los bienes de la parte ejecutada que se localizaran al practicar la diligencia se ha convertido en la actualidad en un supuesto absolutamente excepcional, residual, y ello porque se cuenta como se ha visto con medios más efectivos para atacar el patrimonio de la parte demandada. No obstante, si por las circunstancias excepcionales concurrentes se considerase necesario adoptar este tipo de medida ejecutiva, resultará aconsejable que previamente a librar el correspondiente mandamiento al servicio común respectivo se designe un depositario que se haga cargo de los bienes muebles aprehendidos, efectuando la designación en la forma prevista en el artículo 626 y ss LEC pudiendo recaer dicho nombramiento en la propia parte ejecutante.

6º Embargo de bienes inmuebles.

El embargo de bienes inmuebles es una medida bastante usual y casi imprescindible cuando se procede en ejecuciones que pretenden el cobro de deudas de un importe elevado (sobre todo en las Ejecuciones de Título No Judicial), ya que mediante la realización de los inmuebles trabados es posible obtener sumas elevadas para hacer pago de las deudas reclamadas.

Precisamente por ello uno de los principales obstáculos para adoptar esta medida surge del artículo 584 LEC cuando dispone como principio general de toda ejecución que *"no se embargarán bienes cuyo previsible valor exceda de la cantidad por la que se haya despachado ejecución, salvo que en el patrimonio del ejecutado sólo existieren bienes de valor superior a esos conceptos y la afección de dichos bienes resultare necesaria a los fines de la ejecución."* Esta previsión legal obliga a realizar un juicio de suficiencia y ponderación que ponga en relación el valor del bien con la cantidad efectivamente reclamada, pues como ha destacado la jurisprudencia (por ejemplo, Auto de 16 de diciembre de 2009 de la sección 4ª de la AP de Zaragoza) bajo la invocación de la responsabilidad universal del deudor del artículo 1911 de CC no es admisible embargar inmuebles cuyo valor resulta claramente desproporcionado en relación con la deuda reclamada. Se trata, por lo tanto, de un principio que protege al deudor evitando que puedan atenderse peticiones de la parte ejecutante que resultan claramente desproporcionadas o sin que previamente se hayan agotado otras posibilidades de actuación, lo que da al órgano judicial cierto margen para actuar en estos casos intentando mantener un equilibrio entre las partes.

La principal duda práctica en la aplicación de este precepto radica en cómo materializar esa previsión legal, cómo puede calibrarse esa decisión, a qué criterios debe responder la medida adoptada en el caso concreto. Está claro que no se pueden dar unas pautas apriorísticas porque la decisión va a depender de las específicas circunstancias del caso enjuiciado, por lo que al final la cuestión se resolverá atendiendo a las reglas de la "sana crítica"¹¹, que son las propias de lógica y la razón, lo que poco aclara, y si la parte no está conforme siempre quedará el oportuno recurso para que aporte argumentos adicionales. Pero en relación con los bienes inmuebles sí se puede dar un consejo práctico que puede influir decisivamente para que se acabe acordando el embargo interesado, que consiste en aportar las notas simples registrales de las fincas cuyo embargo se ha interesado. Esta buena práctica, que siguen muchas ejecutantes cuando se trata de deudas elevadas, permitirá constatar qué cargas previas pesan sobre el bien en cuestión, ya que las mismas suponen una evidente pérdida de valor, por lo que ello facilitará la decisión favorable a su embargo. Todo ello en aras a alcanzar ese equilibrio entre los intereses en juego. Debiendo tener en cuenta que como ha destacado la jurisprudencia, Auto de 2 de junio de 2011 de la sección 17ª de la AP de Barcelona, "la prueba respecto del superior valor de los bienes incumbe a la ejecutada que lo alega".

En cualquier caso, una vez realizado ese juicio de suficiencia, si se decreta el embargo de un bien inmueble surtirá efectos materiales desde el dictado de la propia resolución judicial conforme al artículo 587 LEC, pero en el caso de los inmuebles también resulta fundamental su inscripción en el Registro de la Propiedad dado que ello es lo que otorga la prioridad registral conforme al clásico principio de prius in tempore, potior in iure, por ello el artículo 629 LEC prevé que, a instancia del ejecutante, se libre mandamiento al Registro de la Propiedad. Concretamente dispone dicho precepto que "El mismo día de su expedición el Letrado de la Administración de Justicia remitirá al Registro de la Propiedad el mandamiento por fax, o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 162 de esta ley. El Registrador extenderá el correspondiente asiento de presentación, quedando en suspenso la práctica de la anotación hasta que se presente el documento original en la forma prevista por la legislación hipotecaria."¹² Por lo tanto, es fundamental presentar la documentación definitiva en el Registro dentro del plazo legalmente previsto (60 días, susceptible de prórroga) para que la anotación de embargo se consolide.

Esta cuestión cobra especial relevancia en el caso de embargo de bienes gananciales en ejecuciones seguidas únicamente frente a uno de los cónyuges, ya que en tales supuestos para poder practicar la anotación de embargo el artículo 144 RH exige la notificación de la traba decretada al otro cónyuge, lo que puede requerir de un tiempo considerable que puede exceder del plazo de vigencia del asiento de presentación, por lo que podría perderse la prioridad temporal ganada inicialmente con la remisión del fax o comunicación desde el órgano judicial. Por lo tanto, es aconsejable solicitar que se practique dicha notificación desde el mismo escrito en que se solicite el embargo del inmueble una vez constatada su ganancialidad.

Otra cuestión especialmente relevante respecto al embargo de bienes inmuebles es la relativa a la caducidad de la anotación preventiva de embargo en el Registro de la Propiedad, que está sujeta a un plazo de 4 años conforme al artículo 86 LH. Este plazo resulta fundamental toda vez que en el caso de que llegue a adjudicarse un inmueble con fundamento en una anotación preventiva de embargo caducada, no podrán cancelarse las cargas posteriores que consten inscritas, lo que puede perjudicar gravemente al adquirente del bien. Respecto al citado plazo de caducidad tradicionalmente ha existido una controversia sobre los efectos que la expedición del certificado de dominio y cargas del artículo 656 LEC tiene a los efectos del cómputo de dicho plazo, estando enfrentadas sobre esta cuestión la posición del TS, que desde la sentencia de 7 de julio de 2017 consideraba que una vez expedido el certificado podían cancelarse las cargas posteriores aunque la anotación de embargo hubiese caducado, frente a la posición de la DGRN que entendía que no resultaba posible cancelar las cargas en ese supuesto, plasmada en la Resolución de 9 de abril de 2018, BOE 30 de abril. Pues bien, sobre esta cuestión la reciente sentencia de la Sala 1ª del TS de 4 de mayo de 2021 ha venido a adoptar una solución intermedia, considerando que la expedición del certificado de dominio y cargas comparta el reinicio del plazo de caducidad, que se ve ampliado así por otros 4 años más, pero transcurrido ese nuevo plazo la anotación de embargo caducará a todos los efectos.

Precisamente sobre esta cuestión del control del plazo de caducidad de las anotaciones de embargo el TS ha dictado alguna sentencia, como la de 29 de mayo de 2017, considerando que corresponde al abogado controlar dicho aspecto, solicitando la prórroga, no al procurador. Y ello porque se trata de una obligación de contenido jurídico-económico que entra dentro de las funciones propias del abogado en orden a asegurar las medidas cautelares adoptadas para el buen fin del procedimiento, no entrando dentro de las funciones procesales propias del procurador.

Especial referencia hay que hacer al embargo de inmuebles en el caso de fallecimiento del titular del bien, cuando el procedimiento se siga frente a su herencia yacente. En ese supuesto es posible el embargo y realización del bien inmueble, pero hay que tener en cuenta la doctrina de la DGRN (un completo resumen se puede ver en la Resolución de 15-10-2019, BOE 22-11¹³) que permite la inscripción de la adjudicación del bien siempre y cuando conste que la herencia yacente ha estado debidamente representada en el procedimiento y defendida para evitar cualquier atisbo de indefensión. A tal efecto, deberá constar en las actuaciones que la herencia yacente ha estado representada por alguno de los potenciales sucesores del propietario finado, conforme a las previsiones del artículo 807 y concordantes del CC, debiendo en otro caso designarse un administrador judicial al amparo de los artículos 790 y siguientes LEC, lo que va en relación con la exigencia de la doctrina del Tribunal Supremo, sentencia de fecha 3 de marzo de 2011, que estable de que, en caso de desconocimiento de los herederos o interesados en la herencia, se ha de realizar una averiguación previa de su identidad o domicilio, a efectos de posibilitar un emplazamiento o citación personal, y no acudir de modo automático a la notificación edictal.

Un supuesto distinto y que tiene distinto tratamiento se da en aquellos casos en que se pretende el embargo de inmuebles que puedan corresponder por herencia a los ejecutados ya que en estos supuestos, aunque sí resultará posible el embargo y la práctica de la anotación de embargo respecto a la cuota hereditaria que pueda corresponder al demandado sobre la herencia del familiar fallecido, sin embargo no resultará posible practicar la inscripción en el Registro de la Propiedad en tanto no se produzca la división de la herencia y la adjudicación de los bienes, confirmando así que el bien inmueble embargado se integra el patrimonio del ejecutado (cifrese por ejemplo Resoluciones de 1-12-2006, BOE 9-1-17 o 5-6-2018, BOE 25-6). En estos casos se pueden plantear problemas prácticos para lograr que el ejecutado acepte la herencia, pudiendo acudir al expediente previsto en el artículo 1005 CC, pero sobre todo, de cara a que se verifique la división de la herencia, pues el procedimiento previsto en la LEC, artículos 787 LEC sí prevé la intervención de los acreedores en el procedimiento en defensa de sus intereses pero no les reconoce legitimación para promover el procedimiento, lo que puede conducir a una situación de parálisis respecto al procedimiento de realización del bien embargado. Aunque cabría plantearse la posibilidad de acudir a un proceso declarativo para que se condene a los herederos a dividir la herencia, como expone por ejemplo la sentencia de 15-4-2016 de la sección 3ª de la AP de San Sebastián.

Por último, hay que destacar que también se pueden embargar y llegar a adjudicar bienes inmuebles no inscritos en el Registro de la Propiedad. Este supuesto está expresamente previsto en el artículo 629.2 LEC cuando dispone que **"2. Si el bien no estuviere inmatriculado, o si estuviere inscrito en favor de persona distinta del ejecutado, pero de la que traiga causa el derecho de éste, podrá tomarse anotación preventiva de suspensión de la anotación del embargo, en la forma y con los efectos previstos en la legislación hipotecaria."** A su vez el artículo 665 LEC señala que **"a instancia del acreedor podrán sacarse los bienes a pública subasta sin suplir previamente la falta de títulos de propiedad, expresando en los edictos esta circunstancia. En tal caso se observará lo prevenido en la regla 5.ª del artículo 140 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria."** Señalando finalmente dicho precepto 140 del RH dos cuestiones fundamentales: **"Tercera. Los interesados en los embargos podrán pedir que se requiera al considerado como dueño, o a su representante en el procedimiento, para que se subsane la falta verificando la inscripción omitida; y caso de negarse, podrán solicitar que el Juez o Tribunal lo acuerde así cuando tuvieren o pudieren presentar los títulos necesarios al efecto."** **"Quinta. Los interesados podrán solicitar, en su caso, que se saquen a subasta los bienes embargados, con la condición de que el rematante verifique la inscripción omitida antes o después del otorgamiento de la escritura de venta, en el término que sea suficiente y el Juez o Tribunal señale, procediendo, al efecto, según lo expresado en las reglas anteriores. Los gastos y costas que se causen por resistencia del propietario a hacer la inscripción serán de cuenta del mismo."**

La principal duda que se plantea en estos casos es la relativa si se puede compeler al ejecutado para que inscriba su título con carácter previo a convocar la subasta, lo que puede resultar complejo en la propia ejecución, o si se podría sacar el inmueble no matriculado a subasta haciendo constar todas esas circunstancias en el edicto (668 LEC), siendo el adjudicatario quien tendría que correr posteriormente con los gastos de la inmatriculación.

7º Embargo y realización participaciones sociales.

Una figura que se da poco en la práctica es el embargo de participaciones sociales o acciones no cotizadas. La principal característica de este tipo de embargo consiste en que al no estar cotizadas, su realización es más compleja que las acciones que sí cotizan en mercados secundarios.

Esta posibilidad está recogida en el artículo 623.3 LEC que dispone que regula la forma de llevar a efecto el embargo: **"3. Si se embargaren participaciones en sociedades civiles, colectivas, comanditarias, en sociedades de responsabilidad limitada o acciones que no cotizan en mercados secundarios oficiales, se notificará el embargo a los administradores de la sociedad, que deberán poner en conocimiento del tribunal la existencia de pactos de limitación a la libre transmisión de acciones o cualquier otra cláusula estatutaria o contractual que afecte a las acciones embargadas"** Por lo tanto, el primer caso en este tipo de embargo es la anotación del embargo por parte de la propia sociedad titular de las participaciones en el libro registro de socios. En principio hay que considerar que esa anotación no caduca y seguirá vigente mientras no se realicen las participaciones o se levante la traba judicialmente.

Para su realización se aplica la previsión del artículo 635.2 LEC cuando dispone que **"2. Si lo embargado fueren acciones o participaciones societarias de cualquier clase, que no coticen en Bolsa, la realización se hará atendiendo a las disposiciones estatutarias y legales sobre enajenación de las acciones o participaciones y, en especial, a los derechos de adquisición preferente. A falta de disposiciones especiales, la realización se hará a través de notario o corredor de comercio colegiado."** Es decir, que habrá que acudir a la subasta notarial teniendo en cuenta las previsiones del artículo 109 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital que reconoce un derecho subrogación a favor de los socios y, excepcionalmente, de la propia sociedad. Esta adjudicación puede realizarse mediante decreto, no siendo necesario el dictado de auto.

A nivel práctico se ha plantado el interrogante si la anotación del embargo que debe practicarse en el libro de la sociedad puede caducar, pero en principio está claro que no es una anotación registral, pues este tipo de embargos no acceden al Registro Mercantil¹⁴, por lo que se considera que no existe tal plazo de caducidad, manteniéndose la traba hasta que se realicen las participaciones o se alce el embargo por el órgano judicial.

8º Embargo de frutos y rentas. Nombramiento de Administrador.

El último supuesto que se va a analizar es el relativo al embargo de frutos y rentas, que se da con cierta frecuencia en la práctica procesal. Este tipo de traba puede adoptarse cuando la parte demandada despliega una actividad económica productiva o sea titular de cualquier bien o derecho que genere dividendos o rendimientos económicos. Un supuesto bastante usual en la práctica es el embargo de las rentas de alquiler sobre inmuebles de los que sea titular la parte ejecutada.

En estos casos el artículo 622.1 LEC dispone que *"Cuando lo embargado fueran intereses, rentas o frutos de toda clase, se enviará orden de retención a quien deba pagarlos o directamente los perciba, aunque sea el propio ejecutado, para que, si fueran intereses, los ingrese a su devengo en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones o, si fueran de otra clase, los retenga a disposición del tribunal"*, pudiendo llegar a acordarse la medida de administración judicial en aquellos casos en que el obligado no cumpla la orden de retención.

En el caso de los inquilinos para el embargo de las rentas de alquiler, resultará indispensable que conste la correcta recepción de la orden de embargo. En el caso de que no cumplan voluntariamente puede acudir al recurso del artículo 591 LEC mediante la imposición de multas coercitivas periódicas, si bien para ello previamente será necesaria su identificación. Es importante tener claro que cualquier discrepancia que se produzca entre el propietario ejecutado y su inquilino debe quedar fuera de la ejecución y se tendrá que ventilar a través del cauce procesal que corresponda.

La administración judicial también puede acordarse cuando se embarguen empresas o grupos de empresas o cuando se embargaren acciones o participaciones que representen la mayoría del capital social, del patrimonio común o de los bienes o derechos pertenecientes a las empresas, o adscritos a su explotación, y se registrará por lo dispuesto en los artículos 630 y siguientes de la LEC. El trámite esencial viene constituido por una comparecencia ante el Letrado de la Administración de Justicia en la que deben fijarse las condiciones esenciales en que deberá ejercerse el cargo por los administradores designados, resolviéndose por el Tribunal los puntos que resulten controvertidos.

V Casos especiales de embargo frente a determinados demandados.

Las medidas expuestas no constituyen un *numerus clausus*, aunque si son las más frecuentes en la práctica procesal, pudiendo en realidad adoptarse cualquier otra medida ejecutiva de carácter económico que resulte efectiva y jurídicamente viable en función de las circunstancias del caso. Pero a continuación se van a exponer una serie de supuestos en los que, por las especiales circunstancias de los demandados la ejecución dineraria puede resultar más compleja de materializar y llevar a buen término. En estos casos la parte ejecutante debe extremar su diligencia si quiere evitar que la ejecución acabe frustrándose, debiendo actuar con la mayor determinación y celeridad posibles.

1º Embargo frente a autónomos. Los pagos y créditos a su favor. La utilidad del Modelo 347.

Las ejecuciones dirigidas frente a trabajadores autónomos presentan la singularidad de que en muchas ocasiones resulta complejo localizar bienes en su patrimonio con los que hacer pago de la deuda reclamada. Hay que tener presente que conforme al artículo 606. 2º LEC antes citado no podrá procederse al embargo de los instrumentos necesarios para el ejercicio de su profesión *"cuando su valor no guarde proporción con la cuantía de la deuda reclamada"*. Por lo tanto, si el autónomo no dispone de dinero en su cuenta bancaria se plantea la duda de qué medidas se pueden adoptar para intentar recobrar la deuda. A este respecto merece la pena destacar tres especialidades:

En primer lugar, en estos casos puede cobrar especial trascendencia el requerimiento de designación de bienes del artículo 589 LEC, haciendo extensivo el requerimiento a practicar al demandado para que aporte la documentación especial que deben llevar los autónomos. En concreto, se trata de los libros fiscales que deben conservar junto con los justificantes de operaciones registradas y las declaraciones fiscales. Entre estos libros destacan Libro de IRPF, de IVA, declaraciones fiscales, facturas originales y declaraciones censales tributarias. En definitiva, se trata de requerir al demandado autónomo para que su comparecencia o declaración de bienes ofrezca una imagen fiel y exacta del estado de su actividad como autónomo que permita constatar cuál es su situación económica real. En el caso de que el demandado no atienda este requerimiento judicial será necesario presionarle mediante el apercibimiento de multas coercitivas periódicas e incluso la posibilidad de incurrir en responsabilidad penal.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el órgano judicial puede tener acceso a través del PNJ a las declaraciones tributarias del Modelo 347, que es la declaración anual de operaciones con terceras personas (por operaciones que en su conjunto tenga un importe superior a 3.005,06 euros). Se trata de información tributaria que comprende cualquier operación que se haya realizado con proveedores y clientes. En el caso de los autónomos esta información puede resultar crucial, y que permitirá acordar al amparo del artículo 622 LEC el embargo de los créditos que esos terceros con los que se ha relacionado el autónomo puedan tener a favor del mismo, de manera que si se devenga cualquier nuevo derecho quedaría automáticamente trabado desde el momento en que se reciba la orden de retención del Juzgado. Hay que tener presente que en muchas ocasiones los órganos judiciales no facilitan la información del Modelo 347 cuando se realiza la búsqueda genérica en el PNJ, por lo que será necesario solicitar expresamente que se facilite esa concreta información.

Por último, en tercer lugar, hay que tener en cuenta la previsión del artículo 607.6 LEC cuando dispone que ***"los anteriores apartados de este artículo serán de aplicación a los ingresos procedentes de actividades profesionales y mercantiles autónomas."*** Por lo tanto, también en relación con las percepciones que reciban los autónomos habrá que aplicar la escala prevista en el artículo 607.2 de la LEC pudiendo retener únicamente los importes que resulten, siendo la cantidad restante inembargable. La resolución del TEAC de 31 enero 2017, dictada en el recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, R.G. 3517/2016, destaca en relación con dicha previsión legal que ***"esta norma otorga idéntica protección que la establecida para los embargos de salarios, sueldos, pensiones, retribuciones o su equivalente, a los ingresos procedentes de actividades profesiones y autónomas, sin que se pueda exigir ningún requisito adicional que les haga partícipes de la características de aquellos que trabajan bajo el régimen laboral o en el nuevo régimen de trabajador autónomo económicamente dependiente; lo que la norma aquí ha pretendido es asegurar también unos niveles de inembargabilidad y de protección para la subsistencia a aquellos que desempeñan su actividad bajo un régimen alternativo como es el de los trabajadores autónomos, ya que de no existir esta protección, todo el importe facturado por sus servicios sería embargable en su integridad al no tener la consideración de sueldo o salario"***. Por su parte, la Resolución Vinculante de la Dirección General de Tributos, V1244-20 de 5-5-2020 concluye que ***"los límites de embargabilidad del artículo 607.1 de la LEC resultan de aplicación a los ingresos procedentes de actividades profesionales y mercantiles autónomas por remisión del apartado 6 de dicho artículo 607."***

Ahora bien, como reconoce la sentencia de 18-2-2016 de la sección 4ª de la Audiencia Provincial de Murcia, ***"esta extensión que efectúa el art 607.6 LEC presenta importantes dificultades prácticas en su cuantificación y delimitación. En primer lugar, los ingresos derivados de esas actividades económicas no reúnen, de ordinario, los requisitos de continuidad, concentración y periodicidad de los sueldos y salarios del trabajador por cuenta ajena o del funcionario, ya que nos encontramos, como regla general, ante ingresos procedentes de fuentes diversas (los distintos clientes del deudor), de importe variable y temporalmente discontinuos. Y no solo es dificultoso cuantificar los ingresos brutos sino que estos deben minorarse con los gastos y costes para su obtención, que impone deducir de los primeros los costes tributarios, de Seguridad Social y de producción, ya que a los efectos de determinar la embargabilidad lo relevante son los ingresos netos. Así se infiere de la regla contenida en el apartado 5º del citado art 607, aplicable también a los ingresos del apartado 6º que nos ocupa. Ello exige en el deudor un ejercicio de buena fe - art 589 LEC, 11LOPJ y 7 CC - a la hora de aportar todos esos datos que permitan fijar la parte inembargable de esos ingresos; datos que no olvidemos, además, están a su disposición (art 217LEC). En segundo lugar, dada su conexión sistemática con los sueldos y salarios y la finalidad de la norma antes reseñada, la doctrina enfatiza que la extensión del art 607.6 LEC se refiere a aquellos rendimientos de actividades profesionales, industriales, agrarias, etc., a condición de que el deudor ejecutado aplique su trabajo en las mismas, y no se limite a ser el titular de los medios de producción. Dicho de otra manera, se trata de ingresos de aquellos que realizan de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción a contrato de trabajo o relación administrativa. No podemos olvidar que distintos a estos ingresos (contemplados en el art 592.2.8º LEC) son los frutos y rentas (previstos en el art 592.2.5ºLEC), que son rendimientos del deudor por ser titular de determinados bienes y derechos. Frutos y rentas no sujetos a las reglas del art 607 LEC. Así, el AAP de Valladolid, de 28 de octubre de 2003: "No cabe tampoco asimilar, en cuanto bienes embargables, los ingresos procedentes de la actividad profesional (artículos 592.8 º y 607.6º de la LEC) con los frutos y rentas, procedentes de bienes o derechos productivos (artículos 592.5 LEC), siendo estos últimos los únicos que aparecen mencionados, como susceptibles de una administración judicial..."***

En definitiva, una vez localizados los activos del autónomo, para lo cual puede resultar de gran utilidad obtener la información de los modelos 347, se planteará la cuestión de cómo concretar importe susceptible de traba sobre los créditos e ingresos que perciba el ejecutado, a cuyo efecto hay que tener claro que es a dicho demandado a quien le incumbe la carga de probar que tales ingresos están protegidos por las previsiones del artículo 607.6 LEC.

2º Embargo frente a personas jurídicas. Responsabilidad del Administrador.

En el caso de las personas jurídicas el principal problema práctico se suscita cuando se está ante una sociedad que ha cesado totalmente su actividad y se ha extinguido de forma irregular, es decir, sin acudir al concurso de acreedores o mediante la oportuna liquidación, ya que en estos casos, agotados los activos que pudiera tener a su nombre esa persona jurídica (saldo en cuenta bancaria, inmuebles o vehículos, principalmente) las posibilidades de llegar a cobrar la deuda reclamada se reducen drásticamente hasta el punto de hacer que la ejecución dineraria pase a ser inviable y se acabe archivando provisionalmente por falta de actividad. Y es que en el caso de las personas físicas siempre cabe la posibilidad de que se modifique su situación laboral o vengan a mejor fortuna antes de que fallezcan, pero con las personas jurídicas, una vez que la sociedad entra en la situación de inactividad descrita, se puede perder de facto toda posibilidad de verse resarcido, por lo que es fundamental actuar con la mayor celeridad posible.

Lo primero que hay que destacar es que resulta conveniente comprobar que en la consulta del PNJ se han incluido los datos respecto a los bienes inmuebles y vehículos de los que sea titular la persona jurídica demandada, porque si no tiene actividad (lo que implica ausencia de saldo bancario y créditos frente a terceros susceptibles de embargo) serán de los pocos recursos disponibles con los que intentar cobrar la deuda.

La principal duda que se plantea en relación con las personas jurídicas es la relativa a si sería admisible ampliar una ejecución frente a los bienes de los socios o administradores de la persona jurídica, sea S.A o S.L. La respuesta inicial resulta bastante elemental y obvia. Dicha petición no es admisible al carecer de base y sustento legal. Y ello porque dicha petición excedería claramente del objeto del título ejecutivo en que se sustenta la ejecución, que se dirige frente a la persona jurídica, resultando por lo tanto que la petición de ampliación no tiene cobertura legal expresa como exige el artículo 538.2 de la LEC cuando señala que podrá despacharse ejecución frente a **"2.º Quien, sin figurar como deudor en el título ejecutivo, responda personalmente de la deuda por disposición legal o en virtud de afianzamiento acreditado mediante documento público."**

En particular, para poder extender o ampliar la ejecución frente a los integrantes de una persona jurídica, socios o administradores de una S.L o S.A, resultaría necesario la existencia de un título judicial que expresamente habilitara a ello y concretamente que se hubiese declarado su responsabilidad personal ilimitada (cífrase artículos 367 y concordantes del Texto Refundido de LSC), debiendo ventilarse dicha cuestión en todo caso a través del procedimiento declarativo que corresponda (a este respecto, véase por todas la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 2008) y sin que sea admisible su tramitación por vía incidental en la propia ejecución (Cífrase a este respecto lo que indica el Auto 5 de marzo de 2012 de la Sala del artículo 61 de la LOPJ del Tribunal Supremo cuando señala que **"Tampoco sería posible abrir a estos efectos un incidente declarativo en la ejecución, ya que el debate sobre la titularidad de los bienes excede del ámbito de un incidente. En primer lugar, porque, por su propia entidad, tal debate no puede considerarse como una cuestión incidental de la ejecución, sino que constituye por sí mismo el objeto principal de otro pleito de carácter declarativo; en segundo lugar, porque la discusión sobre la titularidad de los bienes a efectos del levantamiento del velo requiere, por su complejidad, un marco procesal mucho más amplio que el que se aplica al procedimiento incidental y, en tercer lugar, porque tal incidente no está previsto, como tal, ni en la LEC, ni la LOPP"**, razonamiento que es extensible a dilucidar la eventual responsabilidad de los administradores o socios de persona jurídica en sede de una ejecución de título judicial)

En esta línea resulta muy claro el Auto de 17-2-2017 de la sección 1ª de la Audiencia Provincial de Zamora cuando señala: **"la responsabilidad personal de un sujeto de derecho distinto del que aparece como deudor en el título ejecutivo -judicial, en este caso- haya de basarse en una "disposición legal" que así lo establezca y, además, que la consecuencia jurídica establecida por la norma habilitante quepa inferirla con toda naturalidad del tenor de los documentos que se acompañan a la demanda ejecutiva. Buen ejemplo de la cautela con que la propia LEC aborda las diversas hipótesis de extensión de la responsabilidad ejecutiva a personas distintas de las mencionadas en el título que se ejecuta, lo hallamos en los artículos 540 a 544 de ese cuerpo legal. Así, en el supuesto del artículo 543 LEC se exige la acreditación documental de que los socios o integrantes de la asociación o unión temporal de empresas condenada han de responder -por acuerdo entre ellos o por disposición legal- de los actos de la unión o agrupación, y otro tanto ocurre con los socios, miembros o gestores de una entidad sin personalidad jurídica condenada por título ejecutivo, con la significativa exclusión de las comunidades de propietarios (artículo 544 LEC). A su vez, en el supuesto de los artículos 1319 del Código Civil y 7 del Código de Comercio bastará la simple acreditación del vínculo conyugal entre el deudor primigenio y su consorte responsable. Por lo que se refiere justamente a las obligaciones solidarias, es muy revelador que el artículo 542.1 LEC haya querido zanjar la controversia originada por el problemático tercer párrafo del artículo 1252 CC, declarando que no cabe perseguir por vía ejecutiva más que al deudor vencido en juicio, descartando que pueda seguirse la ejecución contra los codeudores del condenado por más que estén unidos al mismo por vínculos de solidaridad.**

TERCERO.- El acreedor ejecutante fundamenta la responsabilidad personal de Oscar, administrador único de la Sociedad ejecutada, en la conducta negligente desarrollada por aquel, evidenciada por diversos hechos subsumibles en la hipótesis contemplada tanto en la LRL como LSA, que se resumen en la concurrencia de causas de disolución de las Sociedades de capital, incumplimiento de su obligación de disolución de la sociedad por cese de actividad que ha de llevar a la declaración de su responsabilidad, no habiendo procedido a la presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil, ni a convocar Junta para el acuerdo de disolución, ni ninguna otra actuación de las establecidas legalmente lo que comporta la aplicación automática de lo previsto en el art 538.2 de la LEC. Pues bien, al respecto conviene comenzar señalando que la Ley de sociedades de capital, aprobada por Decreto Legislativo 1/2010, restringe esa responsabilidad a las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución (artículo 367), lo que dificulta sensiblemente aquella eventualidad teórica cuando conforme a la documentación aportada por el demandado opuesto, certificación emitida por la Registradora del Registro de lo Mercantil de esta Provincia, de fecha 20 de junio de 2.016, el mismo causó baja en el cargo de Administrador único con fecha 29 de octubre de 2.003. Pero lo verdaderamente decisivo es que la sentencia del Tribunal Constitucional de 4 de octubre de 2.010 (STC 53/10) ha desechado incluso esa posibilidad, declarando que causa indefensión material, con vulneración del artículo 24.1 CE, la extensión en vía ejecutiva de la condena dineraria firme pronunciada contra una sociedad mercantil y su administrador (ésta última fundada en lo dispuesto en el artículo 133 LSA por remisión del artículo 105 LSRL) a las restantes personas físicas integrantes del órgano de administración de la sociedad deudora, frente a las cuales no se dirigió la acción declarativa de condena. El TC funda su pronunciamiento de amparo en el imperativo de exactitud en el cumplimiento de los pronunciamientos judiciales (las sentencias deben cumplirse en sus propios términos, dispone el artículo 18 LOPJ), en la obligada correspondencia entre el objeto del proceso declarativo -integrado por la causa "petendi" y el "petitum"- y el del ejecutivo por medio del cual se persigue su realización efectiva, en las limitaciones institucionales de la cosa juzgada material (artículo 222.3 en relación con el artículo 538.2, 2º LEC), y en fin, en la constatación de que toda imputación de una conducta contraria a la ley dirigida contra una persona (en aquel caso, igual que en el aquí enjuiciado, dejar de promover la disolución de una sociedad mercantil pese a concurrir causa legal para ello) y la reclamación de la consiguiente sanción legal ha de formularse en juicio declarativo a fin de que esa persona pueda desarrollar la correspondiente defensa. De todo cuanto antecede es que la responsabilidad legal de los administradores de las sociedades mercantiles (artículos 120 CCOM, 133 LSA y 69 LSRL, actual artículo 367 LSC) y, menos todavía, la de quienes pudieran haber ejercido ese cargo de facto pero no de forma nominal, no puede ser incorporada inopinadamente en un proceso ejecutivo, ya sea a su comienzo o en pleno desarrollo. Así pues, sin perjuicio de la trascendencia que puedan encerrar los datos alegados por la ejecutante a los efectos de fundar una hipotética pretensión de condena frente a la persona física ahora apelada, no hay base legal para declarar judicialmente esa extensión con la trascendencia ejecutiva pretendida, por lo que procede la íntegra confirmación del auto apelado."

Y en esta misma línea puede citarse el Auto de 25/12 de 2-2-2012 de la sección 20 de la Audiencia Provincial de Madrid que recuerda que "*como se afirma en el Auto de 13-12-07 de la Sección 28ª de la AP de Madrid, la previsión contenida en el art. 538.2.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil no puede ser interpretada como pretende la parte ejecutante, de modo que sirva para despachar ejecución contra quienes no han sido condenados en juicio, por no ser demandados y por tanto no haber tenido la oportunidad de ejercitar su derecho de defensa por el cauce procesal adecuado para dilucidar cuestiones tan relevantes, como la de la responsabilidad de los administradores sociales de la ejecutada. Y ello, porque no se da el supuesto de hecho previsto en el art. 538.2.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al no tratarse de un caso en el que se responda personalmente de la deuda por disposición legal, de un modo automático e indubitado, que no precise de un juicio declarativo previo en el que se aprecie, con la debida contradicción y posibilidades de alegación y prueba, la concurrencia de los requisitos para que nazca tal responsabilidad personal "ex lege".*

Como sigue apuntando dicha resolución, "*ha de recordarse que, incluso aunque se considerara que la solidaridad del administrador respecto de la sociedad no disuelta cuando concurra causa legal de disolución -o por realizar actos sin la diligencia debida en perjuicio de acreedores- es tan automática como pretende la hoy recurrente, de modo que pudiera considerarse, sin más al administrador social como deudor solidario respecto de las deudas de la sociedad, lo cierto es que junto a la previsión del art. 538.2.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, hay una norma específica en sede de ejecución, aplicable directamente al supuesto de deudores solidarios, como es la del art. 542.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, conforme al cual, las sentencias, laudos y otros títulos ejecutivos judiciales obtenidos sólo frente a uno o varios deudores solidarios no servirán de título frente a los deudores solidarios que no hubiesen sido parte en el proceso.*

Pero si tal previsión legal no fuera suficiente, y cuyo terminante tenor no deja lugar a dudas, ha de recordarse que la responsabilidad solidaria de los administradores sociales respecto de las obligaciones de la sociedad prevista en los arts. 105.5 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas no es tan inmediata y simple como pretende la ejecutante. Ha de alegarse y acreditarse, en el supuesto de que la causa legal de disolución invocada sea la de pérdidas agravadas, como es el caso de autos, que éstas hayan dejado reducido el patrimonio de la sociedad a una cantidad inferior a la mitad del capital social; que los administradores sociales hayan tenido o hayan podido tener conocimiento, actuando diligentemente, de esta circunstancia; que desde ese momento hayan transcurrido dos meses sin haber realizado las actuaciones que la legislación societaria les impone para la disolución y posterior liquidación de la sociedad mercantil; y que la persona a la que se exija la responsabilidad, fuera administrador de la sociedad en el momento en que concurrieron los requisitos legales exigidos para ello en la legislación societaria. Se trata de cuestiones que pueden revestir una considerable complejidad y que, en todo caso, muestran que no se está en un supuesto de responsabilidad personal por deuda en virtud de disposición legal aplicable con un automatismo tal, que permita prescindir de un juicio declarativo en el que aquél al que se le pida pueda defenderse y contradecir la concurrencia de los requisitos legales previstos para que nazca; y por tanto no puede exigírsele, -sin un previo título ejecutivo del que resulte la obligación de pago para esa persona,- en un proceso de ejecución de título judicial, en el que las posibilidades de defensa están muy limitadas (justamente porque ha existido un proceso declarativo previo en el que se ha debatido y resuelto sobre la existencia de la deuda y la imputación de la misma a determinadas personas) tanto en lo sustantivo como en lo procesal."

Ahora bien, sí que existe una importante excepción a la regla general expuesta, esto es, una norma legal habilitante de la responsabilidad de los socios o administradores de una persona jurídica para que puedan responder directamente en la ejecución despachada. Y esa norma es concretamente artículo 399 de la LSC, que reproduce el contenido del artículo 123 de la Ley de Sociedad de Responsabilidad Limitada (LSRL). Y se da en aquellos casos en que la sociedad se ha liquidado sin hacer pago de las deudas existentes en ese momento, lo que determinará una responsabilidad limitada del socio o administrador que responderá de la deuda reclamada hasta el límite de la cantidad que percibió al practicarse la liquidación. En este supuesto sí será posible ampliar la ejecución ex 538 de la LEC frente a los socios o administradores, pero dentro de esa responsabilidad. Y para ello será clave que se acredite que la sociedad se liquidó en esos términos y que cuota percibió cada uno de los interesados.

Sobre dicho precepto el Auto 28-10-2009 de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona señaló lo siguiente: **"TERCERO.- Sin perjuicio del pronunciamiento procedente y con carácter previo a resolver la principal cuestión de si es posible ampliar la ejecución despachada contra una sociedad (por el impago de una deuda social) al socio que responde solidariamente hasta el límite de lo que percibió como cuota de liquidación, debemos rechazar todas las razones expuestas por la defensa del Sr. Landelino para oponerse a tal petición. En efecto, la naturaleza de la deuda no depende del hecho que sea reconocida como tal por la sociedad deudora o por sentencia judicial que se limita a declararla, no a constituirla. Nace la deuda, en el caso de autos, como consecuencia del incumplimiento por FINCONTANT S.L. de un contrato de intermediación inmobiliaria (mediación o corretaje) de 2 de febrero de 1996 que precisó de la oportuna declaración por sentencia judicial firme de 30 de abril de 2004, cuando la sociedad estaba ya disuelta y liquidada (24 de julio de 1998). La acción para exigir esta responsabilidad solidaria no tiene plazo de prescripción específico por lo que se entiende que rige el plazo general de 15 años (art. 1964 C.C. y 943 C.Co) y en el supuesto de autos, se está en el caso expresamente previsto en el art. 123.2 LSRL de un "pasivo sobrevenido" a la disolución y liquidación de la sociedad deudora. Se establece en consecuencia la responsabilidad solidaria del antiguo socio (hasta el límite de lo percibido), tal y como alegó la parte ejecutante, y no un supuesto de responsabilidad por dolo o culpa del liquidador en su cometido, previsto en el inciso final del precepto, como alegó la parte ejecutada. Esta responsabilidad legalmente conformada como solidaria (art. 1144 y 1145 C.C.) plantea la cuestión de si puede exigirse al socio (hasta el límite de lo que percibió en la liquidación de la sociedad) en un procedimiento ejecutivo sin que figure expresamente como deudor en el título judicial ejecutivo a la luz de lo preceptuado en el art. 538.2.2º LEC que, entre otros supuestos, extiende la legitimación pasiva a quien responda personalmente de la deuda por disposición legal.**

CUARTO.- Por un lado, la vigente LSRL ha regulado expresamente el problema del activo y pasivo sobrevenido y, respecto de éste último, se establece que "Los antiguos socios responderán solidariamente de las deudas sociales no satisfechas hasta el límite de lo que hubieran recibido como cuota de liquidación (...)". La redacción de este precepto deja terminantemente claro que la responsabilidad que establece por la deuda social no satisfecha, anterior o posterior a la liquidación de la sociedad, es ajena a cualquier grado de culpa o negligencia. Se trata de una responsabilidad ex lege limitada al resultado positivo de la liquidación percibido por cada antiguo socio que se activa por la acreditación por el acreedor de la existencia de la deuda. Por tanto, es sobre la cuota de liquidación percibida por los socios que se proyecta ope legis y de forma solidaria la responsabilidad patrimonial de la sociedad extinguida tutelando de esta manera el interés del acreedor social insatisfecho, porque deviene imposible para la sociedad extinguida el pago de la deuda social que se ha omitido en el balance final de liquidación y propuesta de reparto efectuado por el liquidador (sin perjuicio de la culpa o dolo en que haya incurrido y que, en su caso, daría lugar a su responsabilidad- art.123.2 in fine y 69 LSRL -).

Por otro lado, el artículo 538.2.2º LEC define perfectamente su ámbito pues se trata de supuestos en que una persona, distinta del deudor designado en el título, no se limita a responder con bienes concretos y determinados (supuesto que se regula en el apartado 3) sino que adquiere una responsabilidad personal por la deuda de otro por disposición legal o en virtud de afianzamiento acreditado mediante documento público. Como es sabido, el despacho de ejecución requiere que lo pretendido en la demanda ejecutiva se atenga a los términos del título, de modo que la pretensión del ejecutante no puede extenderse al cumplimiento de una obligación no reconocida en el título o en condiciones distintas por cuanto la realización de la sentencia en sus propios términos (art. 18 LOPJ) "no sólo forma parte integrante del derecho a la tutela judicial efectiva que el art. 24.1 de la Constitución reconoce, sino que es también un principio esencial de nuestro ordenamiento jurídico" (STC 229/2000 de 2 de octubre). Pero la ejecución de la sentencia no precisa que sea estricta y rigurosamente literal sino más bien que sea efectiva y satisfactoria, atribuyendo al fallo sus naturales consecuencias de acuerdo con la causa petendi y en armonía con el conjunto de la sentencia (STS DE 16-9-2002 (RJ 2002, 7812), STC 148/89 (RTC 1989, 148) correspondiendo al Juez de instancia la facultad de integrar y delimitar con precisión cuál es el alcance del pronunciamiento judicial que ejecuta.

En tal sentido, como se ha señalado, apreciamos que en el supuesto de autos en que, por lo ordenado en el art. 123.2 LSRL, el Sr. Landelino responde de la cantidad, objeto de despacho de ejecución, hasta el límite de lo que percibió como antiguo socio de la sociedad deudora, cabe la ampliación de la ejecución seguida contra la sociedad de la que formó parte como socio, a pesar de no figurar en el título ejecutivo pues así lo preceptúa el art. 538.2.2º LEC, tal y como reclama el apelante.

En efecto, por imperativo legal del art. 123.2 LSRL, se declara la responsabilidad directa de los socios (en este caso, del Sr. Landelino) respecto de la deuda societaria, permitiendo el art. 538.2.2º LEC la extensión de la fuerza ejecutiva del título judicial que la reconoce, a persona no mencionada en el mismo. En este caso hay una indudable y estrecha ligazón entre esta persona (el antiguo socio) y quien figura nominalmente en el título ejecutivo (sociedad deudora). Se ha producido una sucesión ex lege en una "universitas", el activo social remanente, y cuya cuota percibida (y no en puridad el socio) queda gravada o vinculada ex lege a la satisfacción del acreedor insatisfecho. Al no ser discutida la percepción por el antiguo socio de una cuota de liquidación de la sociedad deudora sin la preceptiva satisfacción del pasivo (art. 120 en relación con el art. 118 LSRL) de conformidad con el art. 123.2 LSRL viene obligado a responder personalmente de la deuda social acreditada por disposición legal y por lo tanto cabe que se despache ejecución contra él, como prevé el art. 538.2.2º LEC."

Por lo tanto, en estos casos será determinante obtener la información sobre la disolución y liquidación de la sociedad que obre en el Registro de la Mercantil para comprobar las cantidades percibidas por los socios y administradores de la entidad liquidada como paso previo a instar la ampliación.

Finalmente, también en relación con las personas jurídicas hay que destacar la doctrina se ha posicionado tradicionalmente en contra de la posibilidad de embargar el capital social de la propia mercantil, como destaca el Auto de 20-7-2010 de la sección 3ª de la AP de Castellón, que razona el respecto lo siguiente: **"no cabe acordar el embargo del capital social. Si se tiene presente que no cabe confundir patrimonio social con capital social, que éste está dividido en participaciones sociales pertenecientes a los socios y que, una vez empieza a funcionar una sociedad, el capital pasa a ser una cifra (con funciones de garantía desde luego) que no tiene por qué tener su adecuado correlato patrimonial (buena muestra de lo expuesto son las causas de disolución legal en función de la relación entre capital y patrimonio social), no cabe más que concluir que no es embargable como tal el capital social (otra cosa son las participaciones sociales en que se divide tal como se prevé normativamente), procediendo en consecuencial a estimación del recurso en este punto, al margen que, por lo expuesto, nula eficacia puede haber tenido en puridad el embargo acordado ahora discutido."**

3º Embargo frente a Comunidades de Propietarios.

En el caso de las Comunidades de Propietarios el principal problema que se suscita es que las posibilidades de proceder contra su patrimonio son muy limitadas, pues dicho patrimonio está constituido esencialmente por la cuenta bancaria de la propia Comunidad, que puede carecer de saldo susceptible de traba, siendo inembargables los elementos comunes conforme se desprende del artículo 396.2 CC. Excepcionalmente la Comunidad puede ser titular de algún bien, incluso inmueble, que se explote para sufragar los gastos comunes (garajes, locales, etc).

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el artículo 544 in fine de la LEC excluye expresamente la posibilidad de ampliar la ejecución directamente frente a los vecinos que integran la Comunidad. Para ello deberían cumplirse los estrictos requisitos previstos en el artículo 22 LPH, que exige que los propietarios hayan sido parte el previo proceso declarativo, lo que resulta infrecuente al gozar la propia Comunidad de capacidad para ser parte y, además, solo responderán **"por la cuota que le corresponda en el importe insatisfecho"** pudiendo oponerse a esa ampliación de la ejecución en el caso de que acrediten que se encuentran al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad en el momento de formularse el requerimiento.

Por ello, en los casos en que la Comunidad de Propietaria no resulte solvente o si se trata de deudas muy elevadas que no van poder abonarse de una sola vez con cargo a los fondos comunitarios, la mejor vía para intentar cobrar en un plazo razonable pasa por requerir al Presidente de la Comunidad y a su Administrador, si lo tuviere, para que al amparo del artículo 589 LEC procedan a informar de forma detallada sobre la situación económica de la Comunidad, la previsión de ingresos y gastos, volumen de deuda por los propietarios morosos susceptible de ser recuperada judicialmente, y, sobre todo, que informen sobre la situación del fondo de reserva previsto en el artículo 9.1 f) LPH cuya constitución es obligatoria y que debe cubrir al menos el 10% del último presupuesto ordinario. Pudiendo incluso celebrarse una comparecencia con los representantes de la Comunidad para tratar de establecer un plan de pagos que resulte razonable y viable atendida la capacidad económica de los vecinos que integran la Comunidad, fijando las correspondientes derramas que deberá asumir dentro del plazo pactado a cuyo efecto deberá celebrarse la correspondiente Junta que así lo apruebe.

Otra opción en estos casos, como destaca la sentencia de 14-7-2017 de la sección 4ª de la Audiencia Provincial de Granada pasaría por *"embargar a una Comunidad de Propietarios las cuotas futuras de los comuneros, solicitando al Juzgado que ordene al Presidente o al administrador de la comunidad, que las cuotas que se vayan pagando en el futuro deben ser ingresadas en la cuenta de consignaciones del Juzgado."*

4º Ampliación del embargo frente a otros sujetos al amparo del 541 y 544 LEC.

En cambio, el supuesto del artículo 544 LEC sí resulta aplicable en otros casos problemáticos, como por ejemplo en la ejecución dirigida frente a las comunidades de bienes, que carecen de personalidad jurídica. Concretamente dispone dicho precepto que *"en caso de títulos ejecutivos frente a entidades sin personalidad jurídica que actúen en el tráfico como sujetos diferenciados, podrá despacharse ejecución frente a los socios, miembros o gestores que hayan actuado en el tráfico jurídico en nombre de la entidad, siempre que se acredite cumplidamente, a juicio del tribunal, la condición de socio, miembro o gestor y la actuación ante terceros en nombre de la entidad"*

En este caso suele ser habitual que se solicite al órgano judicial que oficie a la AEAT a fin de que informe de la identidad de los comuneros que integran la comunidad de bienes, actuación que resulta admisible pero que requerirá que el órgano judicial invoque al solicitar dicha información el artículo 95 de la Ley General Tributaria y que se justifique cumplidamente la necesidad de obtener esos datos a través de esa vía por no existir otras alternativas factibles a tal fin. Una vez obtenido los datos de los comuneros y si se acredita que han actuado ante terceros en nombre de la entidad, podrá dictarse auto ampliando la ejecución frente a los mismos, adoptando las medidas que procedan frente a su patrimonio en el caso de que no cumplan voluntariamente con el pago de deuda reclamada.

Finalmente hay que tener en cuenta que existe la posibilidad de ampliar la ejecución y extender los embargos frente a los bienes gananciales cuando el ejecutado no tenga recursos y tales bienes gananciales deban responder por ley de las deudas contraídas.

Concretamente dispone para estos casos el artículo 541 de la LEC lo siguiente:

"2. Cuando la ejecución se siga a causa de deudas contraídas por uno de los cónyuges, pero de las que deba responder la sociedad de gananciales, la demanda ejecutiva podrá dirigirse únicamente contra el cónyuge deudor, pero el embargo de bienes gananciales habrá de notificarse al otro cónyuge, dándole traslado de la demanda ejecutiva y del auto que despache ejecución a fin de que, dentro del plazo ordinario, pueda oponerse a la ejecución. La oposición a la ejecución podrá fundarse en las mismas causas que correspondan al ejecutado y, además, en que los bienes gananciales no deben responder de la deuda por la que se haya despachado la ejecución. Cuando la oposición se funde en esta última causa, corresponderá al acreedor probar la responsabilidad de los bienes gananciales. Si no se acreditara esta responsabilidad, el cónyuge del ejecutado podrá pedir la disolución de la sociedad conyugal conforme a lo dispuesto en el apartado siguiente.

3. Si la ejecución se sigue a causa de deudas propias de uno de los cónyuges y se persiguiesen bienes comunes a falta o por insuficiencia de los privativos, el embargo de aquéllos habrá de notificarse al cónyuge no deudor. En tal caso, si éste optare por pedir la disolución de la sociedad conyugal, el tribunal, oídos los cónyuges, resolverá lo procedente sobre división del patrimonio y, en su caso, acordará que se lleve a cabo con arreglo a lo dispuesto en esta Ley, suspendiéndose entre tanto la ejecución en lo relativo a los bienes comunes.

4. En los casos previstos en los apartados anteriores, el cónyuge al que se haya notificado el embargo podrá interponer los recursos y usar de los medios de impugnación de que dispone el ejecutado para la defensa de los intereses de la comunidad de gananciales."

Por su parte el artículo 1373 del Código Civil dispone que: *"Cada cónyuge responde con su patrimonio personal de las deudas propias y, si sus bienes privativos no fueran suficientes para hacerlas efectivas, el acreedor podrá pedir el embargo de bienes gananciales, que será inmediatamente notificado al otro cónyuge y éste podrá exigir que en la traba se sustituyan los bienes comunes por la parte que ostenta el cónyuge deudor en la sociedad conyugal, en cuyo caso el embargo llevará consigo la disolución de aquélla."*

Por lo tanto, para llevar a efecto la ampliación de la ejecución en estos casos será necesario notificar la demanda ejecutiva y el despacho de la ejecución al otro cónyuge a fin de que pueda ejercitar las opciones que le concede la citada normativa, bien oponiéndose o solicitando la disolución de la sociedad conyugal.

VI. El embargo del sobrante del 611 LEC.

Otra opción que puede ser de gran interés para lograr cobrar la deuda reclamada es la relativa al embargo del sobrante, que está regulado en el artículo 611 LEC cuando dispone que *"podrá pedirse el embargo de lo que sobrare en la realización forzosa de bienes celebrada en otra ejecución ya despachada."*

Tradicionalmente esta tipo de peticiones se ha centrado en la realización de bienes inmuebles, ya que mediante la nota marginal extendida en el Registro de la Propiedad se puede tener conocimiento de que algún inmueble propiedad del ejecutado está siendo objeto de apremio en otro procedimiento, pudiendo en tal caso solicitarse esta medida, en cuyo caso resultará de aplicación la previsión del artículo 611 in fine LEC cuando destaca que *"cuando los bienes realizados sean inmuebles, se ingresará la cantidad que sobrare después de pagado el ejecutante, así como los acreedores que tengan su derecho inscrito o anotado con posterioridad al del ejecutante y que tengan preferencia sobre el acreedor en cuyo favor se acordó el embargo del sobrante."* Para resolver sobre dicha preferencia en el orden de pago deberá celebrarse el incidente regulado en el artículo 672 LEC, al que remite el 692 LEC para el supuesto de las ejecuciones hipotecarias.

Pero además de ese caso típico de embargo del sobrante, esta institución también resultaría aplicable en todos aquellos casos, frecuentes, en que en una ejecución se genere sobrante a favor del ejecutado tras lograr la completa satisfacción del acreedor ejecutante, por haber excedido las cantidades trabadas las que se debían efectivamente en el procedimiento. El problema para aplicar esta medida es que resulta complejo en la práctica tener conocimiento de la existencia de otras ejecuciones frente al mismo demandado en las que pueda generarse ese sobrante, pues no está previsto que el ejecutante pueda solicitar que se efectúe una consulta en el Servicio Común General o Decanato de los Juzgados para poder conocer la existencia de otros procedimientos. Por otro lado, tampoco está previsto que el órgano judicial deba cerciorarse que el ejecutado no tiene otras ejecuciones abiertas y en trámite antes de proceder a devolver al interesado el sobrante generado, lo que puede dar lugar a situaciones cuando menos paradójicas como sucede por el hecho de que se esté devolviendo un sobrante al ejecutado cuando tiene otros procedimientos ejecutivos aún abiertos seguidos frente a su patrimonio. Para evitar este tipo de situaciones sería necesaria una reforma legal del artículo 570 LEC a fin de establecer la obligación de que los órganos judiciales no devuelvan ninguna cantidad al ejecutado como sobrante hasta que hayan comprobado la inexistencia de otras ejecuciones en su contra. Pero mientras ello no sea así, esta posibilidad quedará a expensas de la iniciativa que pueda tener el órgano judicial en el caso de que pueda efectuar una consulta general a la base de datos de su partido judicial utilizando el nombre o demás datos del ejecutado o de que la parte ejecutante de otro procedimiento llegue a tener conocimiento de la existencia de esas otras ejecuciones frente al mismo demandado. En mi opinión, a estos efectos si la parte ejecutante lo solicitara se podría llegar a acordar al amparo del artículo 590 LEC oficiar al Servicio Común o Decanato correspondiente para obtener dicha información, dado que se trata de un dato pertinente y útil, y muchas veces imprescindible, para que la parte ejecutante pueda interesar el embargo del sobrante que se puedan generar en los otros procedimientos ejecutivos seguidos frente al mismo demandado.

VII Evitación del embargo

El artículo 585 LEC faculta al ejecutado para evitar la medida acordada mediante la consignación del importe reclamado. Se trata de una **consignación cautelar**, no para pago, en cuyo caso se aplicaría el artículo 583 LEC.

La principal cuestión que se plantea respecto a esta consignación es la relativa a qué importe debe consignarse para que opere dicha suspensión además del principal reclamado: si únicamente la cantidad presupuestada para intereses y costas, o su importe total una vez liquidados tales conceptos. El Auto de 5 de octubre de 2010 de la sección 3ª de la AP de Castellón se inclina por esta segunda postura al señalar que *"una vez que el embargo ya llevado a cabo es una eficaz medida de aseguramiento de la satisfacción completa de la pretensión...carece de sentido que se levante el mismo antes de que la reclamación haya sido debidamente atendida."*

Por su parte el artículo 586 LEC señala que *"Si el ejecutado formulare oposición, la cantidad consignada conforme al artículo anterior se depositará en el establecimiento designado para ello y el embargo seguirá en suspenso. Si el ejecutado no formulare oposición, la cantidad consignada para evitar el embargo se entregará al ejecutante sin perjuicio de la posterior liquidación de intereses y costas."* Al hilo de este precepto se ha suscitado la controversia práctica de si en las ejecuciones de título judicial las cantidades embargadas tras el dictado del decreto inicial conforme al artículo 551.3 LEC pueden entregarse inmediatamente al ejecutante o si, por el contrario, tiene que transcurrir el plazo previsto para que el ejecutado pueda formular oposición antes de poder acordar dicha entrega. Aunque el tema es discutido, esta última práctica parece la más prudente toda vez que de otra forma podría llegar a darse el caso de que se estimase la oposición teniendo la parte ejecutante que devolver las cantidades percibidas, pero se da el riesgo de que resulte insolvente a tales efectos, no estando por lo demás previsto el cauce a seguir para lograr dicha devolución.

VIII Los pagos judiciales: especial referencia a la cuestión de a favor de quién debe hacerse el pago, la parte o el profesional.

En cuanto a la forma de realizar los pagos judiciales procede señalar en primer lugar que con el anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal del Sistema de Justicia se reforma el artículo 634 LEC para introducir lo que la doctrina denomina "pagos automatizados" en la ejecución, es decir, que en aquellos casos, frecuentes en la práctica, en que se reciban ingresos periódicos o de tracto sucesivo (procedentes de embargo de sueldos, pensiones, etc), bastará con dictar una única resolución informando a la parte ejecutante de que a partir de ese momento se van a efectuar los pagos automáticamente hasta cubrir el principal o los intereses y costas, evitando así el dictado de una resolución ad hoc por cada pago. Se trata de una práctica bastante extendida en la actuación de los órganos judiciales para reducir su carga de trabajo, pero la posibilidad de que se regule expresamente en la LEC resulta acertada porque contribuye a despejar cualquier duda sobre su admisibilidad. No obstante, la redacción propuesta podría mejorarse haciendo alusión más clara a la no necesidad de dictar nuevas resoluciones en tales supuestos.

Por otro lado, para que este nuevo sistema funcione adecuadamente resultaría indispensable que se universalizara el acceso de los profesionales y ciudadanos al contenido de las cuentas judiciales que les afectan, ya que en la actualidad para disponer de tal acceso telemático es necesario ser cliente de la entidad bancaria encargada de la gestión de la aplicación de las cuentas de consignaciones judiciales (concretamente el Banco Santander S.A) lo que parece una posición dominante contraria al principio de libre competencia, de forma que debería suprimirse ese requisito y permitirse a cualquier interesado solicitar dicho acceso desde la sede judicial electrónica.

Y, por otro lado, se pierde la oportunidad para elevar a rango legal la necesidad de que los pagos judiciales se realicen preferentemente mediante transferencia bancaria salvo excepción justificada.

Así como abordar la regulación de los pagos a terceros si disponen de poder o autorización expresa. Sobre esta última cuestión existe una larvada polémica en los órganos judiciales con dos visiones totalmente contrapuestas sobre la forma de proceder. La posición clásica o tradicional considera que los pagos, sean por transferencia o mandamiento de devolución, deben hacerse siempre a nombre de la propia parte beneficiaria del abono. El fundamento de esta postura se encuentra en la dicción literal del artículo 12.1 del Real Decreto 467/2006 cuando establece que **"el reintegro de las cantidades se realizará mediante la expedición del mandamiento de pago a favor del beneficiario"**. Se argumenta, por tanto, que se trata de una norma especial que impone que el destinatario del pago tenga que ser siempre la propia parte, porque es su beneficiario, sin que pueda realizarse el pago mediato a través del representante legal o procesal.

Frente a esa postura se está abriendo paso poco a poco una visión más amplia que considera que también será posible hacer el pago a los profesionales o terceros siempre que estén debidamente autorizados¹⁵. Esta postura se apoya en el artículo 1162 del Código Civil cuando recalca que "el pago deberá hacerse a la persona en cuyo favor estuviese constituida la obligación, o a otra autorizada para recibirla en su nombre." En esta misma línea debe destacarse que con motivo de la pandemia del COVID-19 el Ministerio de Justicia dictó la Circular 1/20 de la Secretaría General de la Administración de Justicia estableciendo que "cuando de conformidad con el poder del Procurador, éste tenga facultades para realizar el cobro, las transferencias pueden realizarse a la cuenta del Procurador, u otro profesional que represente a la parte." No obstante, el problema en estos casos se plantea en el alcance que ha de tener el poder o autorización con el que ha de contar el representante para poder recibir el pago a su nombre, si ha de ser fehaciente, un poder notarial, o si basta una autorización que reúna los requisitos formales necesarios para considerarla válida y suficiente. El Ministerio de Justicia en la Circular 1/20 parece inclinarse por la necesidad de que la facultad de cobro conste en documento fehaciente, en poder notarial, pero ese requisito se antoja excesivo desde el momento en que va a constar una petición escrita de la propia parte interesada que, no hay que olvidar, quedará unida a las actuaciones. Y por otro lado hay que tener presente que el Ministerio de Justicia dictó en fecha 5-6-2019 una "Nota informativa en relación con los poderes suficientes de procuradores y demás profesionales de la justicia para el cobro de mandamientos de pago a nombre de su cliente o poderdante en las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales" considerando que no se necesita poder especial para cobrar los mandamientos de devolución, sirviendo a tal fin el poder apud acta otorgado ante el Juzgado o de forma electrónica, al entender que "el cobro de cantidades derivadas del proceso no es una de las actuaciones para las que la Ley exige poder especial, por lo que si al otorgar el poder el poderdante no excluye expresamente esta facultad, debe entenderse que el poder general es suficiente para el cobro, siempre que las cantidades a cobrar deriven directamente de un proceso judicial." A este respecto tal vez la mejor solución consistiría en que se dejase la decisión a la calificación del documento que realice el responsable de emitir el pago, pudiendo valorar a tal efecto según las reglas de la sana crítica si la autorización aportada reúne las mínimas formalidades exigibles para resultar admisible.

En cualquier caso, y como conclusión, resulta innegable que se impone una reforma de la normativa en esta materia, que debería tener rango de ley, para clarificar definitivamente cómo se debe proceder en estos casos y si es posible el pago al representante de las partes y en qué condiciones.

Finalmente procede señalar que un supuesto especial se da en relación con el cobro de las costas cuando la parte beneficiaria es titular del beneficio de justicia gratuita, pues en dicho caso la posición mayoritaria sí se inclina por hacer el pago directamente a los profesionales intervinientes designados por el turno de oficio, sin perjuicio de su obligación de devolver las cantidades percibidas del erario público, todo ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 de la LAJG.

IX Bibliografía de interés.

Achón Bruñen, M.J., *La ejecución contra comunidades en régimen de propiedad horizontal. Problemática y soluciones prácticas*. Revista Crítica de Derecho Inmobiliario. 2006.

Arribas y Atienza, P. y otro, *Beneficio de justicia gratuita y costas del procedimiento*. Editorial WK-La Ley, 2020.

Ávila de Encío, J., *Embargo y vía de apremio de acciones, títulos o valores no admitidos a cotización oficial y participaciones sociales*. Revista de Derecho Vlex, nº 150, noviembre 2016.

Bañón González, A. y otros. *El embargo. La medida judicial y su anotación preventiva en el Registro de la Propiedad*. Editorial Tirant lo Blanch, 2019.

Cachón Cadenas, M., *El embargo*. Librería Bosch. 1991.

Font de mora Rullán, J., *"La menor onerosidad para el deudor como regla interpretativa de principio en la ejecución civil"* en el Blog de la Editorial Jurídica SEPÍN, 1 de febrero de 2021.

- *"Análisis de las principales novedades en materia de costas y ejecución en el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal de Servicio Público."*, en Editorial Jurídica SEPÍN, Artículo Monográfico. Marzo 2021, SP/DOCT/111328.

- *"¿Es embargable el Ingreso Mínimo Vital instaurado por el Real Decreto-Ley 20/20 de 29 de mayo?"* en el blog de Editorial Jurídica SEPÍN, 26 de junio de 2020

- *"Lecciones de la pandemia del COVID-19 en relación con los pagos judiciales: la necesaria reforma del RD 467/06 sobre depósitos y consignaciones"* en el blog de Editorial Jurídica SEPÍN, 8 de junio de 2020.

- *"Los principios generales del embargo de bienes inmuebles"* en la web de NOTICIAS JURIDICAS. 22 de mayo de 2020. Editorial Wolters Kluwer.

- *"¿Es nuestro sistema de embargo de sueldos y pensiones excesivamente garantista? Propuesta para una reconsideración del artículo 607 LEC"*. Tribuna en Diario LA LEY nº 3030/19 de 19 de marzo de 2019

- *"¿Son embargables las dietas que perciba un trabajador? Jurisprudencia contradictoria."* En la web LEGALTODAY, 26 de abril de 2018 (editorial Thomson Reuters)

- *"La reducción del embargo del sueldo por cargas familiares del 607.4 LEC: un instrumento poco utilizado (por desconocido) por los ejecutados"* en la web de LEGALTODAY, 26 de octubre de 2017 (editorial Thomson Reuters).

- *"La acumulación de salarios y otras prestaciones para su embargo: análisis jurisprudencial del artículo 607.3 LEC"* en REVISTA DE DERECHO VLEX - Núm. 162, noviembre 2017..

- *"El embargo de saldo de las cuentas bancarias con un único ingreso periódico: ¿ahorro susceptible de traba o prestación inembargable?"* En la web de LEGALTODAY, 15 de enero de 2017 (editorial Thomson Reuters).

- *"¿Pueden embargarse las deducciones por maternidad o familiares del IRPF que correspondan al ejecutado? Una reflexión al hilo del Real Decreto-ley 9/2015"* en la web de LEGALTODAY, 17 de julio de 2017 (editorial Thomson Reuters).

Guerra Pérez, M., *"¿Cuándo la valoración de la prueba pericial no respeta las reglas de la sana crítica?"*, en Blog Jurídico Sepín, 3 de mayo de 2021.

Martínez de Santos, A., *Cuestiones prácticas sobre la vía de apremio en el proceso de ejecución civil*, Wolters Kluwer, 3ª edición, 2016.

Notas del documento

- 1 En mi opinión dicho coste sí debería incluirse en la tasación de costas en concepto de suplidos, previa acreditación documental de su coste, pues se trata de actuaciones necesarias y útiles a efectos de lograr el fin propio de ejecución. Aunque la duda se planteará sobre todo cuando se trata de fuentes de información que podrían haberse obtenido de forma gratuita y sin costes adicional por el propio órgano judicial (por ejemplo, información sobre inmuebles). Pero aún en ese caso, si la información ha sido pertinente y útil, considero que debería procederse a su inclusión.
- 2 Fuente: Catálogo de Servicios del PNJ editado por el CGPJ.
- 3 Cífrase que en el presente caso no se está ante una actuación preprocesal, sino estrictamente procesal, por lo que su inclusión en la tasación de costas debería estar fura de toda duda.
- 4 A tal efecto en la práctica se utiliza fórmulas como la siguiente o similares: "De acuerdo con lo establecido por el Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, las partes quedan informadas y aceptan la incorporación de datos a los ficheros jurisdiccionales existentes en este Juzgado, donde ser conservarán con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones que se deben cumplir obligatoriamente. Su finalidad es llevar a cabo la tramitación del presente procedimiento judicial. El responsable del fichero es este Juzgado. Se advierte a las partes que los datos contenidos en las comunicaciones que se efectúen en este procedimiento y en la documentación que se adjunte son confidenciales, quedando prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia."
- 5 Como puede verse en la siguiente información: <https://www.diariojuridico.com/el-cgpj-certifica-la-seguridad-y-trazabilidad-de-las-consultas-realizadas-al-punto-neutro-judicial/>
- 6 Un ejemplo de condena por este tipo de delito lo encontramos en la sentencia de 6-7-2020 de la sección 1ª de la Audiencia Provincial de Lleida, que razona lo siguiente respecto a la concurrencia de este delito: "El legislador diferencia dos conductas: la presentación de una relación incompleta o veraz y la omisión de la presentación de la relación de bienes. En relación con la primera, resulta necesario que se dilate, dificulte o impida la satisfacción del acreedor, como consecuencia de la presentación incompleta o mendaz, pero dicha exigencia no viene expresamente contemplada para los supuestos de omisión de presentación de la relación de bienes La Sala entiende que las exigencias típicas del delito del art. 258.2 son las que literalmente fija el precepto, el cual ni siquiera plantea la necesidad de un doble requerimiento, no pudiendo olvidarse que una ejecución civil precisa poner en evidencia la real capacidad económica del ejecutado, la cual en ocasiones no puede descubrirse a través de los registros públicos, muchas veces desactualizados, precisando la participación activa y facilitadora del ejecutado, por ser quien mejor conoce aquella. De todo ello viene a desprenderse que la apuesta político criminal del legislador ha sido la de destacar el valor de las resoluciones judiciales y reforzar la efectividad de los procesos de ejecución, sancionando las maniobras del deudor ejecutado directamente encaminadas a la dilación o entorpecimiento del proceso. Se ha introducido, por ello, una modalidad específica del delito de desobediencia con idéntica penalidad, para superar las controversias jurisprudenciales y dogmáticas sobre este precepto, que, al exigir en ocasiones la "contumacia" al cumplimiento, convalidaban modos de actuación abusivos o fraudulentos. Por ello, si exigiéramos un elemento adicional que el tipo no contempla frustraríamos el propósito perseguido por el legislador. Otra interpretación haría incomprensible la introducción de un precepto que añadiera mayores cargas acreditativas respecto del tipo de desobediencia sancionando la conducta con la misma pena. Mientras que en los alzamientos de bienes del art. 257 del CP los créditos son el objeto de protección, en el art. 258 se garantiza el proceso ejecutivo, como cauce ineludible para conseguir realizarlos, siendo evidente que tal cauce se verá siempre afectado y prolongado innecesariamente por el silencio del ejecutado que conducirá inevitablemente a la investigación de su patrimonio. Todo ello nos lleva a concluir, tal y como señalábamos al principio, que la aplicación del art. 258.2 del CP no exige la concurrencia de elemento adicional alguno al de su literalidad, ni requiere, por tanto, que el deudor sea solvente y posea bienes embargables."
- 7 Fuente: Catálogo de Servicios del PNJ editado por el CGPJ.
- 8 Concretamente, según informa el CGPJ la forma de funcionar de este tipo de embargos es al siguiente: ¿Cuáles son las fases por las que pasa una solicitud de embargo? El proceso que sigue una solicitud de embargo es el siguiente: a. El usuario introduce la orden de embargo y queda almacenada en el sistema. b. A lo largo de la madrugada, la petición se envía a las entidades financieras dadas de alta en el sistema. c. En un plazo de 24 – 48h, desde que fue introducida la orden, el servicio recibe todas

las respuestas de las entidades financieras. Si el embargado no es cliente de la entidad, o siendo cliente, no se ha encontrado dinero en cuentas a la vista, el proceso se cierra. d. Si se encuentra dinero en las cuentas a la vista del embargado, 24h después de recibir la respuesta de todas las entidades financieras, el sistema envía una orden de ejecución de embargo. e. Una vez que la entidad financiera recibe la orden de ejecución, el dinero se envía a la cuenta de consignación, mediante el procedimiento habitual de las entidades financieras. El proceso se completa en un plazo total de 3 a 5 días. El CGPJ no lleva el control de las transacciones bancarias entre las entidades financieras y la cuenta de consignación, por tratarse de un procedimiento interno de dichas entidades.

- 9 Concretamente, como se indica en Font de Mora Rullán, J., "¿Pueden embargarse las deducciones por maternidad...?", op. cit., p.1, citando una consulta elevada a la propia AEAT "En definitiva, nos encontramos ante una deducción de la cuota diferencial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que, en el supuesto que ahora nos ocupa, ha sido abonada por la Agencia Tributaria de forma anticipada. Estas deducciones por familia numerosa, por ascendientes con dos hijos o por personas con discapacidad a cargo, pueden aplicarlas todos los contribuyentes que cumplen unos requisitos puramente objetivos, sin consideración alguna a su nivel de renta, no teniendo pues el carácter de mínimo de subsistencia vital. Son, por tanto, en el caso de que se abonen anticipadamente, devoluciones tributarias que quedan retenidas por el... acuerdo entre el Ministerio de Justicia y la AEAT"
- 10 Sobre esta cuestión puede verse el ejemplo citado por Font de Mora Rullán, J. "La reducción del embargo de sueldos..." op. cit. in fine.
- 11 Para una aproximación al concepto de sana crítica puede verse Guerra Pérez, M., "¿Cuándo la valoración de la prueba..." op.cit.
- 12 Conforme a la Instrucción sobre presentación por fax de documentos electrónicos con código de verificación seguro, dictada por la DGRN el 19 de julio de 2019, el asiento deberá ser consolidado de oficio una vez comprobada la autenticidad del documento electrónico mediante la oportuna consulta del CSV, careciendo de sentido la exigencia de nueva presentación de dicho documento a tales efectos.
- 13 Resolución que señala que: «En los casos en que interviene la herencia yacente, la doctrina de este Centro Directivo impone que toda actuación que pretenda tener reflejo registral deba articularse bien mediante el nombramiento de un administrador judicial, en los términos previstos en los artículos 790 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, bien mediante la intervención en el procedimiento de alguno de los interesados en dicha herencia yacente (Resoluciones de 27 de mayo y 12 de julio de 2013), 8 de mayo de 2014, 5 de marzo de 2015... Esta doctrina se ha matizado en los últimos pronunciamientos en el sentido de considerar que la exigencia del nombramiento del defensor judicial debe limitarse a los casos en que el llamamiento a los herederos desconocidos sea puramente genérico y no haya ningún interesado en la herencia que se haya personado en el procedimiento considerando el juez suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente».
- 14 En este sentido Resolución de 8 de abril de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador mercantil III de Alicante, por la que se deniega la anotación preventiva de embargo sobre participaciones sociales
- 15 La AEAT para la devolución del IRPF señala en su página web que "el pago de la cantidad a devolver se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta bancaria que el obligado tributario o su representante legal autorizado indiquen como de su titularidad en la autoliquidación tributaria, comunicación de datos o en la solicitud correspondiente..."